

HILDEBRANDT

en sus trece

FOTO JOEL DURÁN



El cuentazo del discurso

► Anticipos del mensaje de Dina Boluarte ante el Congreso confirman la vocación del gobierno por el cinismo, la grandilocuencia y la mentira

(2, 3 y 30)

TC lavará a Keiko

(4 y 5)

Invasión china por la pota

(6 y 7)

Sobón del año

(28 y 29)

Paquetazo antiambiental

(10 y 11)

Los Judas de las marchas

(8 y 9)

INDECOPÍ se vende a las constructoras

(24 y 25)

Gaza: el horror de las fosas comunes

(22 y 23)

Dina Boluarte:
la narrativa del
ensueño con el mal
gusto de siempre.

AMÉRICO ZAMBRANO

En su segundo mensaje a la nación por Fiestas Patrias Dina Boluarte, la presidenta más impopular de Latinoamérica, describirá a su administración como un gobierno eficiente y democrático que ha logrado “hitos” en la gestión pública desarrollando obras “emblemáticas” y alcanzando índices de solidez macroeconómica.

Se trata de un régimen que supuestamente lucha contra la corrupción, que cumple con sus compromisos y que ha conseguido que el país vuelva a crecer, según la versión enmascarada que presentará Boluarte, quien es investigada por delitos de corrupción y por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas sociales.

“Hemos salvaguardado al país. Hoy el Perú vive en democracia”, señalará la mandataria ante el pleno del Congreso de la República este domingo 28 de julio, a un año y medio del inicio de su gestión.

Así consta en el borrador del discurso presidencial por Fiestas Patrias, al cual este semanario tuvo acceso a través de distintas fuentes que laboran en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la cartera de Educación.

El documento, que fue evaluado en sesión del Consejo de Ministros el miércoles último, tiene unas 40 páginas, 30 menos que el discurso del año pasado. En el borrador del mensaje a la nación, Boluarte no reconoce ninguno de los principales problemas registrados durante su mandato: el estancamiento de la economía, el aumento de la pobreza extrema y el incremento del crimen organizado, con niveles récord de robos, secuestros, extorsiones y asesinatos.

En el discurso que ofrecerá ante el Congreso, Boluarte se pinta como una estadista y construye una narrativa de éxito para hacer creer a la población que su gobierno ha salvado al país del desastre que supuso el régimen del izquierdista Pedro Castillo, del cual ella formó parte como ministra y vicepresidenta.

Esta última idea buscaría complacer a los congresistas del fujimorismo y de las bancadas de derecha y de ultraderecha que la escucharán en el pleno

El cuentazo del 28

► Anticipos del discurso de Dina Boluarte ante el Congreso confirman la vocación del gobierno por el cinismo, la grandilocuencia y la mentira

este domingo 28 de julio. Y que son los que verdaderamente mandan en el país, según confirma la prestigiosa revista inglesa "The Economist".

Boluarte señalará, por ejemplo, que su gobierno, en un año y medio de gestión, impulsó la construcción de "grandes obras de infraestructura", promovió la inversión pública, redujo la

recuperar la confianza", se lee en el borrador del mensaje a la Nación. De esta manera, y con la anuencia del Congreso que la protege, Boluarte recurre a la grandilocuencia para eludir cualquier posible autocrítica.

No parece estar dispuesta a ventilar públicamente las acusaciones de corrupción en las que ha sido comprometi-

su gobierno. Pero dirá, según el borrador de su discurso, que es preferible hacer obras y equivocarse en el camino, a no hacer nada.

¿Ficción, realidad paralela o cinismo? El politólogo y abogado Eduardo Dargent cree que es una mezcla de los tres factores. "Yo creo que hay cinismo porque, además, se trata

si fuera un "préstamo" que le hizo el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Ocorima, y la absoluta incompetencia del equipo que la acompaña. "Son ministros de muy bajo nivel que se prestan a ese juego y a ese tipo de grandilocuencias sin contenido", asegura el politólogo. "Estamos atrapados con la seguridad de que a todos los

recuperación económica, inseguridad ciudadana, generación de empleo y "modernización" de la educación y la salud.

"Tenemos grandes retos en el futuro inmediato. Obras que asegurarán nuestro crecimiento. El Perú apuesta por la inversión", dirá la presidenta, según el borrador de su discurso por Fiestas Patrias.

En el plano económico, Boluarte culpará del estancamiento económico al gobierno de Pedro Castillo, del cual formó parte. De acuerdo con el discurso de la presidenta, la crisis económica que sacudió al Perú en 2023, la peor en unos 30 años, no fue producto de la incertidumbre política, como lo señaló la agencia de calificación de riesgo Moody's, sino del "deficiente manejo de la economía en el gobierno pasado".

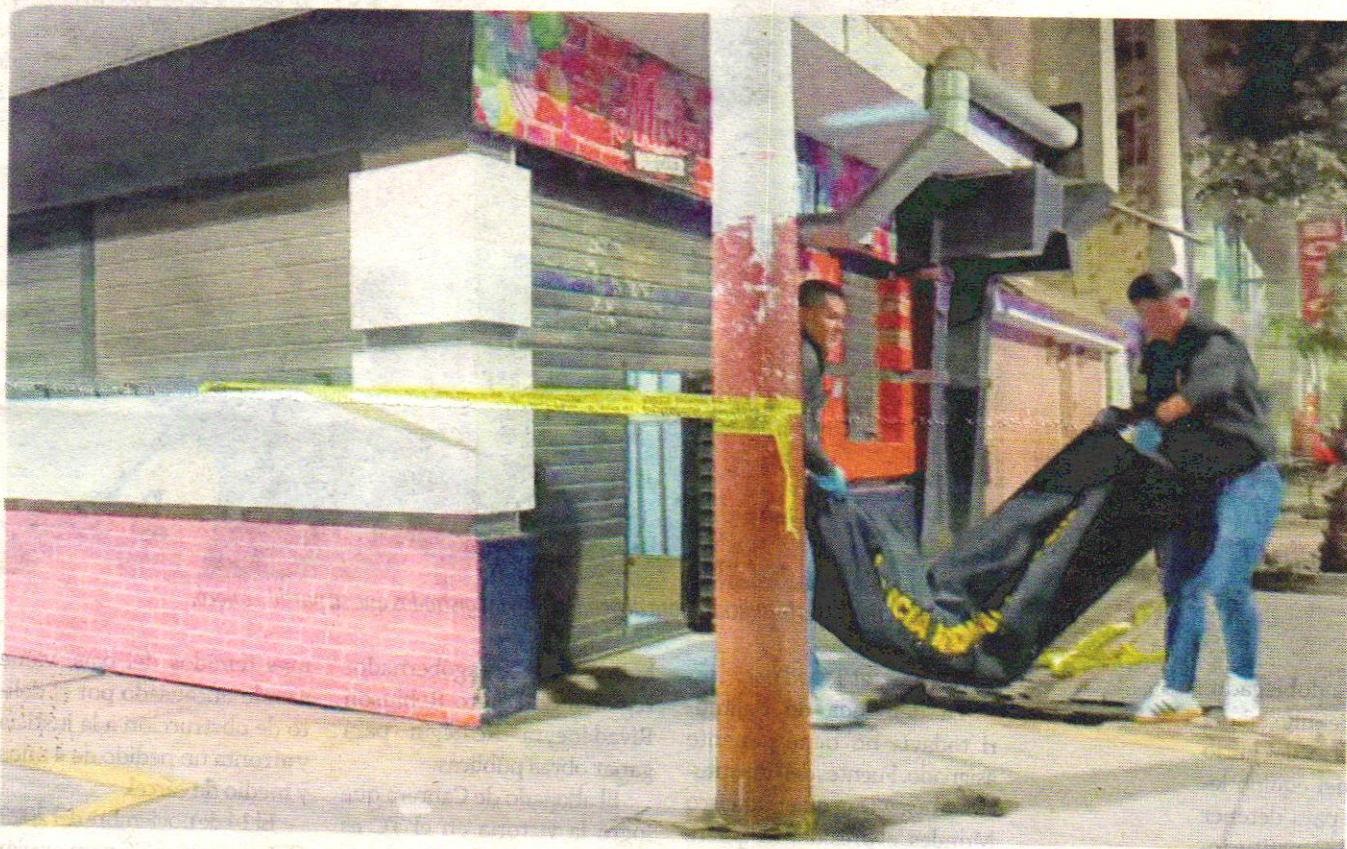
En este escenario, Boluarte se erigirá como la salvadora del país y asegurará que durante su administración el Producto Bruto Interno (PBI) creció en 5,3 % en abril pasado, la tasa más alta en 32 meses, y que la inflación en mayo pasado cerró en 2 %, bajando con ello la tasa anual por segundo mes consecutivo. La proyección del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que Boluarte dará a conocer este domingo 28, señala que la actividad productiva crecerá 3,2 % este año.

Para Dina Boluarte estas cifras son indicadores de una solidez macroeconómica que permitirá, según su mensaje, "recuperar la confianza del mundo empresarial en el Perú y el extranjero".

No será una tarea sencilla. La calificación crediticia del Perú fue disminuida a BBB-, la más baja en 11 años, por Standard & Poor's y otras calificadoras de riesgo en mayo de este año. Y un mes después se supo que el 87 % de empresarios peruanos desaprobaba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, de acuerdo con una encuesta elaborada por la firma Ipsos Perú, que recogió la percepción de 153 directores ejecutivos de las 2,500 empresas más importantes del país.

El respaldo de los CEO al gobierno de Boluarte se desplomó del 71 % al 12 % en solo un año. Entre los factores del desencanto figuran el incremento de la criminalidad, la inestabilidad democrática, el deterioro institucional y, sobre todo, la debilidad, por no

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30



Inseguridad: anunciará un contingente de nuevos policías, el resguardo "a todas horas del día" y la construcción de un Laboratorio de Criminalística nivel 1.

FOTO RPP NOTICIAS

inflación, revirtió el estancamiento económico, combatió la delincuencia y recuperó la estabilidad política que el país necesitaba.

Boluarte califica estas supuestas acciones de gobierno como los "hitos" que marcaron su gestión. Gracias a estas iniciativas, según la presidenta, el Perú es ahora un país "con crecimiento y estabilidad". Y esta presunta estabilidad —alega quien habita en Palacio de Gobierno— le permitirá concentrarse en los objetivos más inmediatos de aquí a 2026.

"El Perú vuelve a crecer y a

da por su posesión de relojes Rolex y otras alhajas de lujo. Tampoco sobre el desbalance patrimonial que se le atribuye por no declarar sus cuentas bancarias, de acuerdo con la Contraloría. Y menos aún sobre el sabotaje incesante contra el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC), que investigan a su hermano Nicanor Boluarte.

La presidenta señalará durante su presentación ante el Congreso que sí se han cometido algunos errores durante

claramente de un gobierno dependiente del Congreso, un gobierno títere", señala Dargent a esta revista. "Por otro lado, creo que también hay la necesidad de mostrar que se están haciendo cosas. Y levantar las cosas que se han hecho y magnificarlas, cuando obviamente hay un tema grande de calidad de política pública y reformas que no se están haciendo", dice el experto.

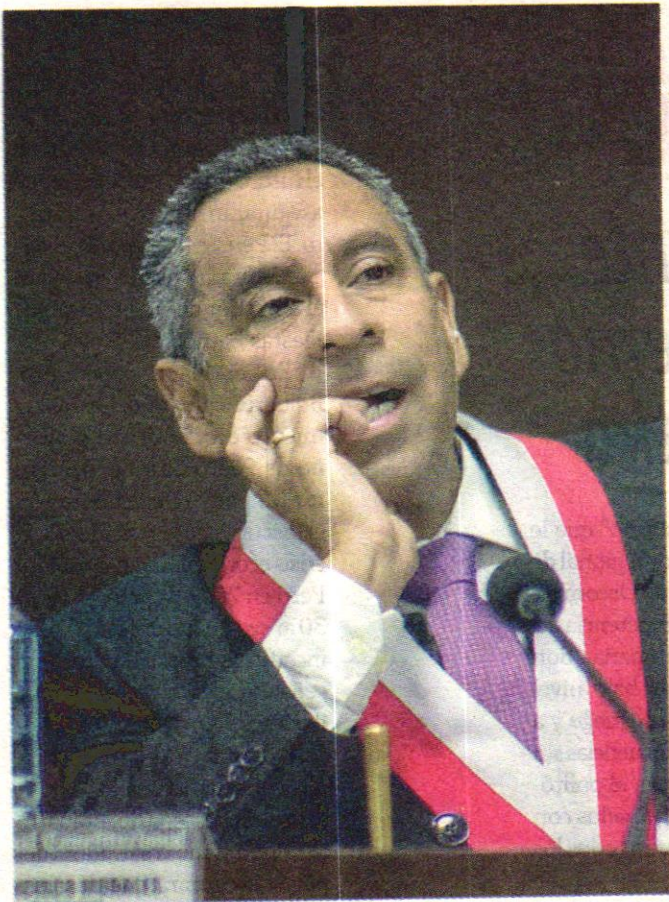
Al cinismo, Dargent suma el autoengaño de la presidenta por el "caso Rolex", donde Boluarte intentó disfrazar la entrega de los relojes de lujo como

que tienen poder les conviene mantenerse hasta el 2026. Y eso es lo que vamos a ver", añade Eduardo Dargent.

Boluarte anunciará que en abril del próximo año convocará a elecciones generales para el 2026 y adelantará que su gobierno se compromete a garantizar el desarrollo de unos comicios "libres y transparentes".

LLUVIA DE PROMESAS

Los ejes más importantes del segundo mensaje a la Nación de Dina Boluarte serán la



Francisco Morales Saravia, presidente del TC: todo indica que se prestará al lavado (y planchado) de la lidereza.

Operación TC

► El Tribunal Constitucional nombrado con la anuencia de Fuerza Popular salvará a Keiko Fujimori próximamente. Así lo indican los antecedentes

ELOY MARCHÁN
FOTOS CÉSAR ZAMALLOA

La jefa de Fuerza Popular ha puesto en marcha el "operativo TC". El objetivo de Keiko Fujimori es que el Tribunal Constitucional anule el juicio que afronta por organización criminal y lavado de activos. "La chica" considera que llegó la hora de ajustar cuentas en la Casa de Pilatos.

El plan original de la defensa de Fujimori era que la sala que la está juzgando accediera a los pedidos de nulidad y revirtiera el auto de enjuiciamiento que emitió el juez Víctor Zúñiga Urday, pero el proyecto no salió como se esperaba. La Sala, presidida por Juana Caballero García, hasta ahora no ha aceptado las so-

licitudes ni se ha doblegado.

El último 2 de julio, al día siguiente del inicio del juicio oral, el pedido del equipo legal de Fujimori para detener su juicio llegó al Constitucional. Giulliana Loza, la abogada, ensaya en el documento una nueva estrategia legal. En lugar de arremeter contra José Domingo Pérez, apunta baterías contra el juez Zúñiga, a quien acusa de haber vulnerado los derechos de su defendida.

Loza puso en marcha la travesía legal por los juzgados de primera instancia que la llevó hasta el TC el pasado mes de febrero. Primero recurrió al Tercer Juzgado Constitucional. Como era de esperar, la jueza Ana Osorio Sosa no aceptó el pedido. Apeló a la Tercera Sala Constitucional, que también rechazó la solicitud. Y, finalmente, llegó a



Keiko Fujimori: su suerte judicial ahora depende de los magistrados que su partido colocó.

su destino, el TC *ad hoc*.

La demanda de Fujimori todavía no tiene ponente asignado. Fuentes del Constitucional aseguran que Francisco Morales, el presidente, quiere resolver el asunto "antes de septiembre".

Dos recientes fallos exculpativos marcan el preámbulo de la decisión que tomarán los magistrados puestos por el actual Congreso: el caso del empresario loretano Jorge Cabrera Salvatierra y la demanda presentada por el abogado Arsenio Oré, uno de los 39 procesados en el caso "Cócteles".

El 20 de mayo último el TC anuló el juicio que Cabrera enfrentaba por lavado de activos. Cabrera señaló que el fiscal que lo investigó y el juez encargado de su caso no le dieron la debida oportunidad para defenderse. Cabrera estaba acusado de co-

ludirse con el exgobernador regional de Loreto Robinson Rivadeneyra Reátegui para ganar obras públicas.

El abogado de Cabrera que logró la victoria en el TC es Julio Espinoza Goyena, cuyo estudio defiende a dos procesados en el caso "Cócteles": Efraín Goldenberg, recaudador de dinero presuntamente ilícito, y Adriana Tarazona, administradora de Fuerza Popular. Los argumentos de la defensa del empresario Cabrera son los mismos que los de Keiko Fujimori y su abogada.

Arsenio Oré también ha abierto una trocha legal para que el TC limpie de polvo y paja a Fujimori. En el organigrama de la acusación fiscal Oré era el brazo legal de la organización y el encargado de hacer cambiar de versión a los falsos aportantes. Oré, uno de los penalistas

más temidos del país, viene siendo encausado por el delito de obstrucción a la justicia y afronta un pedido de 4 años y medio de cárcel.

El 14 de noviembre del 2023 Oré recurrió al TC para anular el proceso judicial contra él. El abogado señala que hubo una vulneración de sus derechos porque José Domingo Pérez no debió ser el fiscal a cargo de su caso debido a que era "víctima" de la obstrucción a la justicia. Oré no se proclama inocente sino que su expediente se retraiga a sus orígenes en el Ministerio Público y Pérez no esté a cargo de la nueva investigación.

El último 24 de mayo el pleno del TC vio la demanda de Oré y escuchó al abogado durante 20 minutos. La audiencia, pese a ser el primer expediente del caso "Cócteles" que llega a



Arsenio Oré Guardia: recurrió al TC para ser retirado del juicio por el caso "Cócteles". La votación habría sido 6-1 a su favor.



José Chlimper: tiene dos expedientes en el TC. En uno de ellos acusa al fiscal Pérez de vulnerar sus derechos.

Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia
Tercera Sala Constitucional

Lima, 26 de junio de 2024.

EXP. N° 01911-2024-0 3° Sala Constitucional de Lima

SEÑOR:
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Presente.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
OFICINA DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
02 JUL. 2024
RECIBIDO

Tengo el honor de dirigirme a usted a fin de remitir a fs.120, la acción de Habeas Corpus promovida por Guillian Araceli Loza Avalos a favor de KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, dirigido contra el JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA, por supuesto atentado contra su libertad individual - principio de legalidad penal y otro. En mérito a lo dispuesto mediante Res. N° 03, de fecha 19/JUN/24 de fs.119, que concede recurso de agravio constitucional, contra la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 02, de fecha 16/MAY/24 obrante a fs.93 y ss.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Mentamente.

PODER JUDICIAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RECEPCIÓN FISCALÍA FISCALÍA
Fiscalía de la Corte Superior de Justicia de Lima

Registro N° 02109-2-24-R

Oficio del 2 de julio último de la Tercera Sala Constitucional enviando todo el expediente de habeas corpus de Keiko Fujimori al Tribunal Constitucional.

la máxima instancia constitucional, pasó desapercibida para los medios de comunicación.

En la sesión Oré dijo: "Durante 20 horas revisaron mis documentos contables y administrativos y no se encontró absolutamente nada (...) Él (José Domingo Pérez) comprobó que no había ningún documento y, además, porque él no podía dirigir una investigación en la cual, según el delito, era perjudicado en

la investigación que llevaba".

En la audiencia pidieron la palabra cinco de los siete magistrados para hacerle preguntas a Oré. Todas fueron blandas. A la audiencia no se presentó el procurador del Ministerio Público y el magistrado Pedro Hernández dijo que la ausencia era "una falta de respeto a este tribunal".

El magistrado Hernández es el ponente del caso de Oré. Llegó al TC en diciembre del

Reg. de seg. ESCRITOS DE EXP
N° 4804-24-ES

Exp. N° 02803-2023-HC
Escrito
Sumilla: Solicito tener presente al momento de resolver.

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

JULIO CÉSAR ESPINOZA GOYENA, abogado del señor José Chlimper Ackerman, identificado con DNI N° 07656377, en el presente proceso de Habeas Corpus seguido ante el Tribunal Constitucional; ante usted me presento y con el debido respeto digo:

Solicito tener presente al momento de resolver las siguientes consideraciones que sintetizan los fundamentos de nuestra demanda de Habeas Corpus, así como, las consideraciones jurídicas expuestas en la audiencia de fecha 24/MAY/24, ante el Pleno del Tribunal Constitucional:

1. Pretensión específica

Se declare:

i) La nulidad del Requerimiento Acusatorio de fecha 11/MAR/21 y sus sucesivas modificaciones, así como la Resolución No 28 del 18/ABR/2022 que declaró no ha lugar el pedido de control formal de la acusación;

ii) Se disponga la emisión de un nuevo Requerimiento Acusatorio, ordenándose se vuelva a realizar la Audiencia Preliminar de Control de Acusación, a fin de que se corrijan las graves e irreparables violaciones a los derechos fundamentales;

iii) Se excluya al fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez por haber perdido obiectividad en sus funciones fiscales al haber formulado una acusación con hechos nuevos no imputados durante la investigación preparatoria, y al Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Dr. Víctor Zúñiga Urdy por haber decidido irregularmente devolver en más de una oportunidad la acusación fiscal y no haber controlado su legalidad habiendo perdido imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Último escrito ingresado por José Chlimper al TC. Pide ser sacado del caso "Cócteles". El expediente está listo para votación.

2023 con 103 votos del pleno del Congreso. Fuerza Popular votó en bloque por Hernández. Fuentes confiables del TC señalan que el borrador de sentencia que ha redactado Hernández le da la razón a Oré y que la votación fue la semana pasada: 6 a favor y 1 en contra.

Manuel Monteagudo fue el magistrado que habría votado en contra de declarar fundado el pedido de Oré. ¿Por qué la

resolución hasta ahora no se hace pública? Los informantes cuentan que Monteagudo, hasta el cierre de esta edición, se encontraba elaborando la sustentación de su voto.

"Si el TC le da la razón a Arsenio Oré, es sólo cuestión de tiempo que le den también la razón, primero, a José Chlimper Ackerman y luego a Keiko Fujimori", dice un integrante del equipo del fiscal Pérez.

Hasta el momento solo

Oré, Chlimper y Fujimori tienen expedientes en el TC. En las próximas semanas llegarán los de Mark Vito Villanella y de otros 30 procesados.

José Chlimper, el hombre que llevó 210 mil dólares en un maletín a RPP para anuncios publicitarios en favor de Fujimori en el 2011, tiene dos pedidos en el TC: uno contra el fiscal Pérez y el otro contra el juez Zúñiga. El pasado 24 de mayo, el mismo día que se vio la demanda de Arsenio Oré, fue la audiencia del primer expediente de Chlimper. Según las fuentes, la causa aún no ha sido votada. En el TC Chlimper tiene como abogado a Julio Espinoza, también representante legal del empresario Jorge Cabrera.

Las audiencias del caso "Cócteles" están suspendidas hasta el próximo 8 de agosto. Pero pese a la estrategia mediática y al apoyo masivo de la gran prensa, el golpe a Keiko Fujimori ha sido duro. Ante lo que se viene, su abogada tuvo que reconocer públicamente, por primera vez en 10 años, que su defendida, su marido y la cúpula de la organización que dirige recibieron más de 17 millones de dólares en maletines. Hasta ahora lo habían negado siempre.

Ahora la estrategia será repetir un nuevo estribillo: la procedencia del dinero es legal.

Los abogados también se la han pasado atacando al fiscal Pérez por presentar una acusación corregida 22 veces y señalando que el dinero negro recibido de Odebrecht no se podrá demostrar "porque los brasileños no vendrán a declarar al juicio".

"Cuando uno está en las audiencias, ve a los abogados y sus defendidos con una tranquilidad como si supieran que el juicio en cualquier momento se quebrará", dice un fiscal del Equipo Especial.

"Consideramos importante que las audiencias vuelvan a ser presenciales, con acceso a la prensa. Hay muchos detalles del juicio, quizá el más grande por lavado de activos por las personas involucradas, que se están perdiendo en la virtualidad", añade la fuente.

Al cierre de esta nota Keiko Fujimori estaba de viaje en Estados Unidos a donde marchó el pasado 15 de julio. En los últimos dos meses la jefa de Fuerza Popular ha viajado cuatro veces fuera del país: tres a Estados Unidos y una a España. ■

Pota madre

► El régimen con sede en el Congreso facilita la piratería pesquera china y permite la libre depredación del calamar gigante. La flota tiene 670 embarcaciones y actúa en mancha desde hace 12 años. Pero nunca lo había hecho con la impunidad de hoy

BRUNO AMORETTI

Una ciudad flotante con bandera china se ha instalado frente a la costa de Piura, en el borde de las 200 millas del mar peruano. Son más de 670 buques chinos que ingresan al mar peruano cada vez que quieren y apagando el sistema satelital. La administración Boluarte les ha facilitado la maniobra para el saqueo.

“En cualquier momento este puerto se va a convertir en un cementerio de botes”, dice Pedro Silva, pescador artesanal del puerto de Paita. El pasado 16 de julio un grupo de pescadores filmaron a dos buques en las inmediaciones de la bahía piurana. Estos poteros chinos arribaron para un “cambio de tripulación”, pero los pescadores del lugar indican que sólo es un pretexto para pescar pota con maquinaria industrial.

“En Paita tenemos más de dos mil embarcaciones poteras. Hoy tenemos el 70% de los botes varados. La faena, que hace 10 años duraba uno o dos días, hoy demora dos semanas para recolectar 15 toneladas de pota. Mientras que un solo buque chino en menos de una semana puede recoger hasta 900 toneladas”, dice Carlos Bayona, uno de los pescadores que grabó a las naves chinas.

De acuerdo con la organización Global Fishing Watch,

especializada en el monitoreo mundial de pesca, entre el 2010 y el 2022 la captura china del calamar gigante en el Pacífico aumentó en 250%, pasando de 142 mil toneladas a más de medio millón.

“China ya es considerada la procesadora más grande de calamar con un 40% del valor de la producción mundial”, afirma Renato Gozzer, director de pesquerías de la ONG Sustainable Fisheries Partnership.

Eloy Aroni, representante de Artisonal, consultora especializada en temas pesqueros, afirma que la flota de Xi Jinping está funcionando como una barrera que ha modificado la migración de la pota y que ha afectado negativamente a los pescadores peruanos, hoy en serias dificultades para acceder al recurso marino.

“Cerca de la mitad de la flota permanece en altamar hasta tres años sin regresar a China, mientras que la otra mitad ingresa a mar peruano, donde hay abundancia del recurso”, apunta Aroni.

Los expertos miran con preocupación el incremento acelerado de los buques que recalán en nuestros puertos. Desde mayo del 2023 hasta la fecha se ha registrado alrededor de 250 arribos a puertos de Perú (Paita, Bayóvar, Chimbote, Callao y Pisco). Y en lo que va del 2024 han ingresado 84 poteros chinos, según la Autoridad Portuaria Nacional.

El año 2020, para tratar de frenar la pesca ilegal de

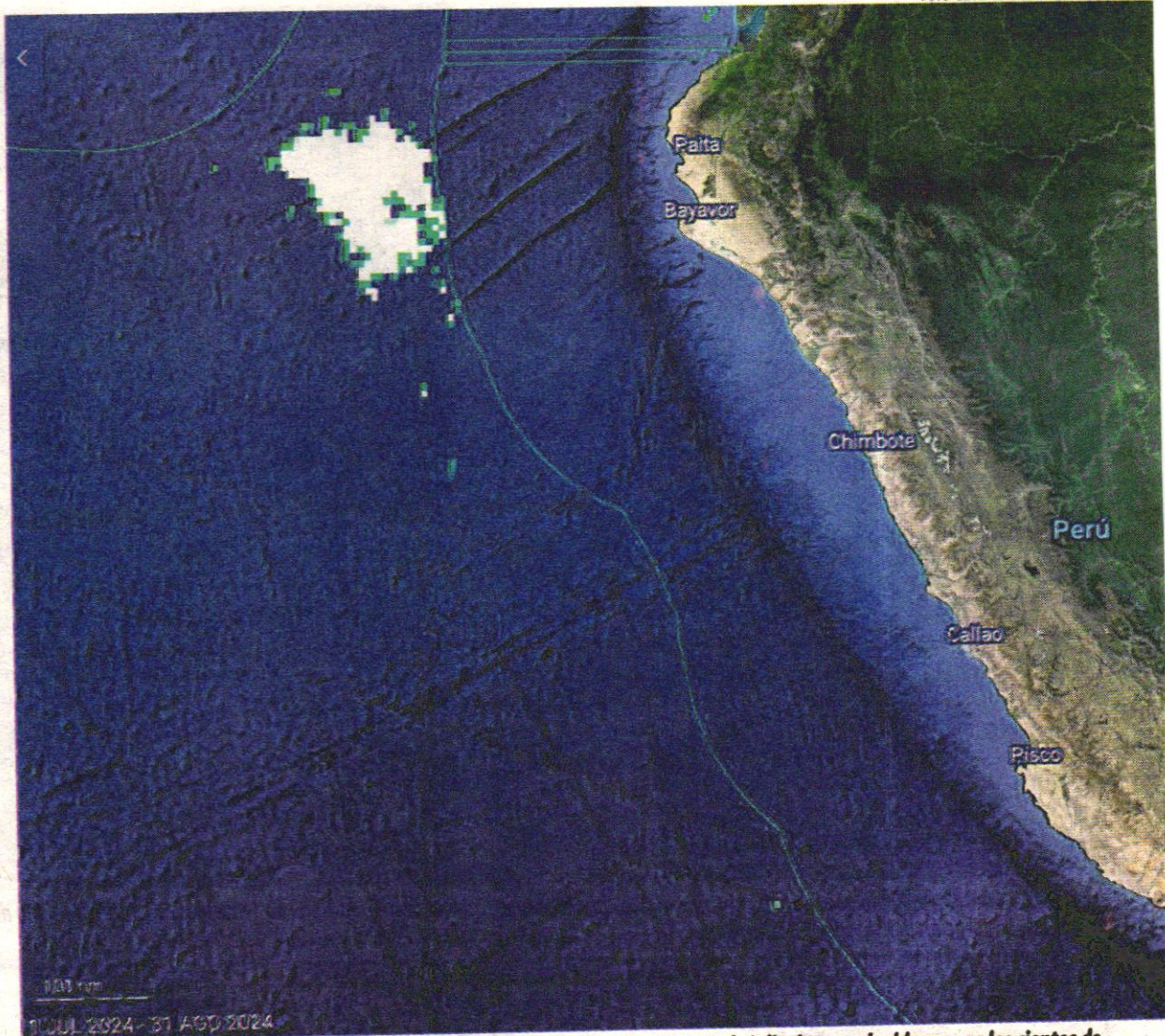


Imagen satelital nocturna de las 200 millas del mar peruano tomada el martes 23 de julio. La mancha blanca son los cientos de barcos poteros chinos en plena captura de calamar.

FOTO THE OUTLAW OCEAN PROJECT

El “Zhe Pu Yuan 98”, una embarcación potera que funciona como “hospital flotante”. Desde el 2021 hasta la fecha, este buque recaló 14 veces en el puerto del Callao para desembarcar a 15 tripulantes heridos de gravedad.



pota, Perú exigió a los buques que quieran ingresar a puertos nacionales tener dispositivos satelitales instalados seis meses antes del atraque. “La lógica es sencilla: si vas a entrar a mi casa, tienes que garantizar que no me estás robando”, afirma Alfonso Miranda, exministro de Producción y presidente del Comité de

Pesca de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Entre el 2020 e inicios del 2023 la cantidad de barcos chinos que ingresaban a puertos peruanos se redujo a una docena por año. “Los chinos preferían viajar 90 días a sus puertos y recorrer 15 mil kilómetros de ida y vuelta antes que instalar un

dispositivo que cuesta 100 dólares mensuales. Evidentemente tenían mucho que esconder”, dice Miranda.

En mayo del 2023 el ingreso de poteros chinos repuntó. Los especialistas coinciden en que una reunión entre el embajador chino en Perú con la entonces viceministra de Pesquería de Producción



FOTO MARINE TRAFFIC

El "Lu Rong Yuan Yu 779" ingresó al Callao el 4 de diciembre pasado. Tiene antecedentes por apagar su dispositivo de identificación automática durante 167 días en el Atlántico.



FOTO THE OUTLAW OCEAN PROJECT

El 8 de mayo el "Hong Run 55" se encontraba pescando calamar en la milla 210 cuando repentinamente apagó su dispositivo de identificación automática por 36 horas. Luego se dirigió al Callao donde permaneció 39 días.

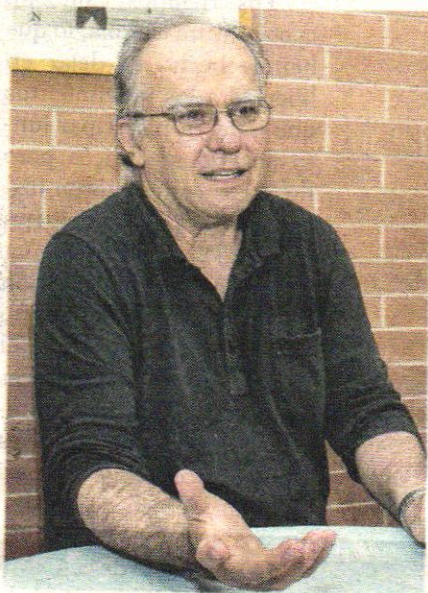
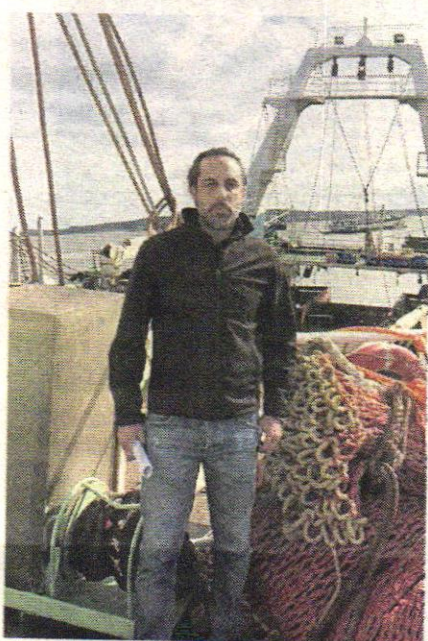


FOTO CÉSAR ZAMALLOA

Juan Carlos Sueiro, director de la ONG Oceana: "Luego de la actualización del TLC con China en mayo del 2023 empezaron a sacarle la vuelta a la norma. Tenemos la impresión de que el Ejecutivo aceptó hacer la vista gorda y no defender su dignidad y soberanía".



Milko Schwartzman, especialista argentino en conservación marina: "Esta flota recibe información actualizada del gobierno chino sobre las colonias de calamares, además subsidia toda la logística de la cadena de producción".



Carlos Bayona, pescador que registró en video dos embarcaciones chinas en las inmediaciones de la bahía de Paita: "La faena que hace 10 años duraba uno o dos días, hoy demora dos semanas para recolectar 15 toneladas de pota".

fue clave para que los barcos chinos volvieran a ingresar masivamente a los puertos peruanos.

"Ocurrió en el contexto de la discusión de la actualización del TLC con China. Ahí empezaron a sacarle la vuelta a la norma. Tenemos la impresión de que el Ejecutivo aceptó hacer la vista gorda y no defender su dignidad y soberanía", afirma Juan Carlos Sueiro, director de la ONG Oceana.

Desde entonces las embarcaciones chinas volvieron a atracar en los puertos peruanos sin el GPS alegando una emergencia, cambio de tripulantes o actualización de documentos. "Hemos detectado que los barcos ingresan con estos motivos, pero luego terminan en los astilleros recibiendo manteni-

miento que no es de emergencia", señala Eloy Aroni.

La mayoría de astilleros están bajo la administración de la Marina. En el 2023 el Servicio Industrial de la Marina (SIMA) reportó un ingreso de S/ 22,3 millones por "reparaciones navales" a 26 embarcaciones extranjeras. La mayoría no tenía sistema de monitoreo satelital.

En la lista de buques chinos que ingresaron a puertos peruanos desde mayo del 2023 por lo menos 74 tienen antecedentes por trabajo forzado, muerte de marineros a bordo, retención de salario y pesca ilegal.

Uno de los casos más impactantes es el del barco Zhe Pu Yuan 98, una potera que funciona como "hospital flotante" para atender a tripulantes heridos de otros

barcos. Desde el 2021 hasta la fecha, este buque recaló 14 veces en el puerto del Callao para desembarcar a 15 tripulantes heridos de gravedad, uno de ellos expulsando sangre por la boca y dos marineros con amputación de extremidades.

Para las incursiones piratas dentro del mar peruano, la flota china apaga el sistema de identificación automática (AIS, por sus siglas en inglés) que previene colisiones. Esto los convierte en totalmente invisibles. También suelen falsear su ubicación, duplicar matrículas y realizar transbordo de pota a naves frigoríficas no autorizadas.

El barco Lu Rong Yuan Yu 779 ingresó al Callao el 4 de diciembre pasado. La nave tiene antecedentes por haber apagado su AIS durante 167

días en el Atlántico.

El 8 de mayo ingresó el Pu Yuan 827, un barco con un amplio prontuario, por cambiar varias veces el número que identifica a su estación. Ese mismo día el Hong Run 55 se encontraba pescando en la milla 210, cuando repentinamente apagó su AIS por 36 horas. Cuando reapareció, estaba atracando en el Callao donde permaneció 39 días.

El 18 de junio pasado atracó en el primer puerto la nave Lu Yan Yuan Yu 007. No levó anclas hasta 43 días después. Este barco registra antecedentes por apagar su AIS durante tres semanas el año 2019.

La propietaria de la nave es China Yantai Marine Fisheries Co. Ltd., una empresa estatal del gigante asiático que posee otras nueve embarca-

ciones también con antecedentes de pesca ilegal.

El argentino Milko Schwartzman, especialista en conservación marina, ha investigado durante años las flotas chinas que pescan ilegalmente en América del Sur. "Esta flota recibe información actualizada del gobierno chino sobre las colonias de calamares, además subsidia toda la logística de la cadena de producción", dice el experto a esta publicación.

"Es una anarquía completa -continúa el reconocido especialista-. Tienen entre 28 a 35 tripulantes, en su mayoría de Indonesia y Filipinas. Muchas veces suben al barco con engaños. Solo dos países, Uruguay y Perú, le dan apoyo a esta flota. Ellos son cómplices de las violaciones a los derechos humanos y del daño económico y ambiental a nuestra región".

Los pescadores peruanos salieron a marchar el miércoles 24 de julio. Reclaman nuevas reglas de juego para la pesca de la pota. Anuncian otra protesta para el fin de semana. "Actualmente trabajamos para subsistir. Sacamos entre 1,000 y 1,500 soles por una faena de dos semanas. No se imagina la impotencia que siento cuando vuelvo a la bahía y veo 30 buques chinos", afirma Pedro Silva.

"A nosotros nos multan con miles de soles, nos aplican la ley, pero a los pesqueros chinos les ponen multas irrisorias por pesca ilegal. El rol de este gobierno está invertido: gobierna para China y no para los peruanos", sostiene Elsa Vega, vocera de la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal. ■

Contramarcha

► La traición de la Asociación Nacional de Movimientos Regionales confirmaría el fracaso de las marchas programadas. El Congreso gobernante fue clave para el arreglo

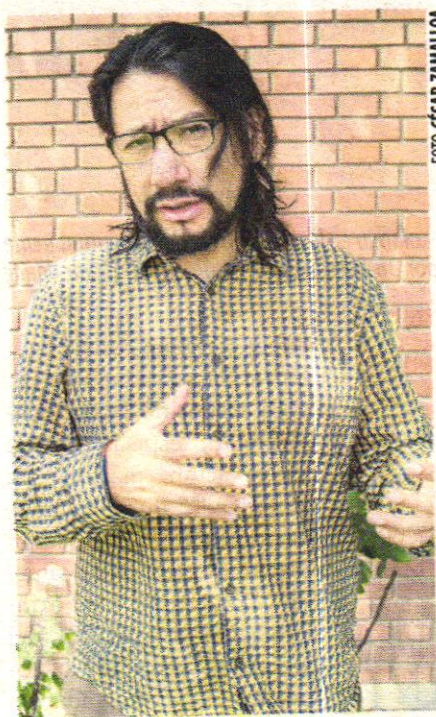


FOTO CÉSAR ZAMALLOA

"Los jóvenes están tomando la opción de alejarse de la política e irse del país. Hay un éxodo de jóvenes que ya no ven mucho futuro en el Perú", dice el sociólogo Omar Coronel.



FOTO JOEL DURÁN

"Hay un problema de legitimidad en muchos de los convocantes de las marchas", dice el analista Juan de la Puente.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA

"Hay miedo ante la respuesta violenta de las Fuerzas Armadas y la Policía", dice la politóloga Katherine Zegarra.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA

"En las protestas contra Manuel Merino hubo un solo pedido: que él salga de la presidencia. Ahora no hay un eje articulador", dice el politólogo Fernando Tincopa, del Centro Wiñaq.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA

"Vimos el ciclo de protestas más grande de la última década y, sin embargo, el gobierno nunca atendió a la ciudadanía", dice Paulo Vilca, politólogo del IEP.

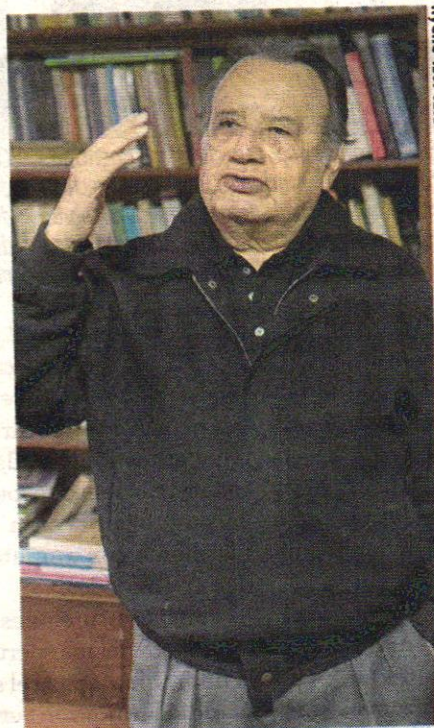


FOTO JOEL DURÁN

"Hay un divorcio entre la política y la sociedad. El actual gobierno está en el aire. Y solo se mantiene porque está sostenido por las Fuerzas Armadas, los empresarios y la gran prensa", dice el sociólogo Sinesio López.

ALONSO ZAMBRANO

La marcha convocada para el 28 de julio ha sufrido un golpe fatal. Sus propios or-

ganizadores se encargaron del sabotaje. Consultados para este reportaje, varios analistas tratan de explicar por qué la ciudadanía no manifiesta en las calles su desprecio por el gobierno y

el Congreso más aborrecidos de los últimos 34 años. El último domingo 21 la Asociación Nacional de Movimientos Regionales (ANMR), el gremio que convocó la "marcha de los 4

suyos" para Fiestas Patrias, anunció que ya no participará de las manifestaciones del 26, 27 y 28. Las peleas intestinas por cuotas de poder han dinamitado la protesta en las calles. El hecho de que

algunos dirigentes se hayan inscrito ya en partidos da una pista de cuáles eran sus verdaderas metas.

Desde la dirección de la organización, acusan al presidente Freddy Vracko Metzger de utilizar la manifestación para beneficiar al partido Perú Regionalista de Integración Nacional (PRIN), movimiento en el que Vracko se inscribió hace dos meses.

"El 22 de junio se llevó a cabo una asamblea de movimientos regionales en Lima. Lo curioso es que se hizo en un local del PRIN. Los agremiados acusaron a Vracko de usar a los movimientos regionales para impulsarse como candidato presidencial", dice un agremiado de la ANMR.

"Los tiempos cambian, la coyuntura cambia, lo que hemos hecho es dejar en libertad a los movimientos que quieren participar junto a partidos políticos, pero nosotros como cuerpo institucional ya no participaremos. (...) En el caso del señor Vracko, que ya tomó posición por un partido político, no es ético ni elegante que él pueda -digamos- aparecer en escena. Que sea sincero y que diga qué intereses tiene", dice Jorge Sumari Buendía, secretario general de la ANMR.

La implosión de la ANMR es sólo un ejemplo más de lo que está ocurriendo con la política local. Fernando Tincopa, sociólogo y analista del Centro Wiñaq, asegura que la fragmentación ha sido clave en el fracaso de las marchas.

"La protesta del 28 de julio va a tener una capacidad de convocatoria limitada o baja. Los movimientos sociales se han erosionado desde el 2023. Hay incapacidad para obtener cuadros y liderazgos (...) A eso se suma que desde la pandemia se perdió el activismo de los centros federados estudiantiles y los grupos de jóvenes", dice Tincopa.

"El Perú no sólo está polarizado. Hay una enorme fragmentación que traba las posibilidades de construir un movimiento nacional capaz de evitar que continúe el régimen que ha capturado el poder", dice el analista Juan de la Puente. Y la izquierda -asegura- es la gran responsable.

"Hay un problema de legitimidad en muchos de los convocantes de las marchas.



Freddy Vracko, presidente de la Asociación Nacional de Movimientos Regionales: encabezó la deserción. Lo que quería era entrar en política "por la puerta grande".

Tradicionalmente –añade De la Puente–, las demandas de democracia, progreso, integridad, transparencia pública estaban lideradas por la izquierda. Pero esta izquierda en la última etapa del gobierno de Castillo fue totalmente indolente. Aceptó, bajo el criterio de un 'gobierno del pueblo', que el robo y el latrocinio no eran objeto de crítica", dice De la Puente.

Omar Coronel, sociólogo, asegura que otro de los factores que influye en el rechazo de los jóvenes para acudir a manifestaciones es la represión del gobierno.

"Es un gobierno que está muy al margen de la población, que es lo normal en re-

gímenes autoritarios donde se responde con violencia o con silencio, como Venezuela o Nicaragua. (...) Los jóvenes están tomando más la opción de alienarse de la política o de irse del país. Hay un éxodo de jóvenes que ya no ven mucho futuro en el Perú", dice Coronel. Y agrega: "Hay una voluntad de reprimir a todo costo a la población. Entonces la gente mira eso y se da cuenta de que ya no está tan segura en las calles cuando sale a protestar, que realmente está en un régimen que los puede matar".

Coronel asegura que el Congreso también puso lo suyo para lograr la "resignación popular". "Si ha habido una amnistía para

los violadores de derechos humanos antes del 2002, la expectativa de muchos es que este Congreso, tranquilamente, podría dar otra amnistía para los policías y militares que 'defendieron el orden y la democracia' entre el 2022 y el 2023'. Ese es el tipo de cosas que suceden en regímenes autoritarios", dice el analista.

El politólogo Paulo Vilca, director de proyectos del Instituto de Estudios Peruanos, coincide en que las masacres en Ayacucho y Juliaca han impactado en la población. "Antes la protesta era un mecanismo para conseguir un cambio en el gobierno. El año pasado eso cambió. Lo que vimos fue el ciclo de

PRONUNCIAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS REGIONALES DEL PERÚ

La Asociación de Movimientos Regionales del Perú, Persona Jurídica que representa a las Organizaciones Políticas Regionales de todos los departamentos de nuestro país; debidamente inscrita en la partida registral 11162448, a los militantes de los Movimientos Regionales y a la opinión pública expresamos lo siguiente:

PRIMERO:
Comunicamos a los casi seiscientos mil militantes de los Movimientos Regionales del Perú, que la directiva de nuestra organización viene encontrando entendimiento, en Congresistas y Bancadas del Congreso de la República, respecto a la importancia del mantenimiento de la figura de Movimientos Regionales, como representación de la Libertad de Participación Política Descentralizada, habiendo obtenido compromisos suficientes para que en la segunda votación de la reforma constitucional no se haga efectiva la eliminación de movimientos regionales de la vida política del Perú.

SEGUNDO:
Somos convencidos de la necesidad de atención de la diversa plataforma de lucha acordada en la Asamblea del 22 de junio de 2024, que incluye justicia para los peruanos asesinados en las protestas de 2022 y 2023, la no privatización o concesión de las prestadoras del servicio de agua; el respeto de la paridad y alternancia de la mujer en la política nacional, el incremento del sueldo mínimo y las pensiones de cesantías, y el respeto por la independencia de las instituciones democráticas del país, todo ello exigido a la Presidenta por sucesión mediante carta de fecha 19 de julio de 2024. SIN EMBARGO, EN LA PRIMERA FECHA DE MOVILIZACIONES, SE HA DEVELADO LA UTILIZACIÓN DE LA LUCHA POR PARTE DE ETERNOS CANDIDATOS DE LA POLÍTICA TRADICIONAL, LOS QUE EN LUGAR DE LEVANTAR LA AGENDA DE LUCHA LEVANTAN PANCARTAS ANUNCIANDOSE PRESIDENTES DEL PERÚ, SITUACIÓN QUE DESNATURALIZA LOS JUSTOS RECLAMOS DE LA CIUDADANÍA.

TERCERO:
La Asociación de Movimientos Regionales del Perú se ratifica en el apoyo a la plataforma social que se reclama, PERO COMUNICAMOS A LA CIUDADANÍA QUE NO HABRÁ MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL, siendo de libre elección de las organizaciones regionales su participación en las marchas convocadas para fiestas patrias.

Perú, 21 de julio de 2024

982329276 / Jr. Puno 676, Puerto Maldonado, Madre de Dios

El vergonzoso comunicado publicado el pasado 21 de julio por la Asociación Nacional de Movimientos Regionales. Informa que ya no participará de las protestas convocadas para el 28 de julio. ¡Pactaron con el Congreso de los delincuentes!

protestas más grande en las últimas décadas y, sin embargo, el gobierno y la clase política en general nunca dieron una respuesta para atender y escuchar las demandas de la ciudadanía. Todo lo contrario. Vimos decenas de personas fallecidas, cientos de heridos y personas procesadas. Al no ser efectivas las protestas, eso lleva a que las personas no reincidan en un mecanismo que saben que no va a funcionar", afirma.

"No se le encuentra ninguna utilidad a marchar. Si a esto se suma el temor ocasionado por los muertos de las marchas anteriores, hay miedo ante la respuesta violenta de las Fuerzas Armadas y la Policía", sostiene la politóloga Katherine Zegarra.

Otro factor que influye en la poca participación en manifestaciones es el centralismo de la capital. "La política se ha concentrado en Lima. El impacto de una marcha tiene que ver mucho con el número de personas que protestan en la capital", dice la analista.

¿Y qué pasó con la 'generación del bicentenario'? La diferencia radica en una agenda demasiado dispersa.

"(...) Todas las organizaciones sociales han atomizado la lista de demandas políticas y eso hace que no se articule una sola voz. En el caso de Merino sí había un solo pedido: su salida de la presidencia. Ahora no hay un eje articulador", dice Fernando Tincopa.

"Hay un divorcio entre la política y la sociedad. El actual gobierno está en el aire. Y solo se mantiene –asegura el sociólogo Sinesio López– porque es sostenido por los poderes fácticos: las Fuerzas Armadas, los empresarios y la gran prensa".

Al cierre de esta nota en las regiones del sur los paros eran acatados sin mayor respaldo de la ciudadanía. En Puno, en la provincia de El Collao, el Comité de Lucha de Juliaca liberaba el puente internacional de llave después de 7 horas de cierre. Lo mismo ocurría con la carretera Interoceánica en la provincia de Azángaro.

En Arequipa delegaciones de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) realizaron un plantón en el terminal terrestre interregional anunciando su participación en las protestas en Lima. ■

Ambiente enrarecido

► Se viene un paquetazo impulsado por la Sociedad Nacional de Minería que apunta a debilitar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE)



FOTO CÉSAR ZAMALLORA

Juan Carlos Castro Vargas, ministro del Ambiente, se ha convertido en el padrino de este "paquetazo antiambiental".

JULIO ROSPIGLIOSI

Un nuevo "paquetazo antiambiental" está en marcha. Su padrino es el ministro del Ambiente Juan Carlos Castro Vargas. "El exceso de tramitología ha sido una piedra en el zapato para el Estado. Ha impedido que el país sea competitivo", declaró Castro a inicios de mes ganándose un sonoro aplauso de la Sociedad Nacional de Minería.

La arremetida empezó a fines de abril con la publicación

termina siendo la estocada final para que nadie controle", advierte Jaime Borda, secretario ejecutivo de la ONG ambientalista Red Muqui.

Una de las propuestas que preocupa a los especialistas es que el Senace deje de decidir qué proyectos deben pasar por la evaluación conjunta de entidades especializadas como Serfor, Sernanp o la ANA, proceso que se conoce como "esquema de articulación"

"Con la propuesta, se considera que ya no sea el Senace el que determine qué proyectos priorizados deben ingresar a este 'esquema' sino que

PROYECTO



Decreto Supremo N° -2024-MINAM

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY N° 30230, LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS TRIBUTARIAS, SIMPLIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS Y PERMISOS PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PAÍS, Y ESTABLECE OTRAS DISPOSICIONES, APROBADAS POR EL DECRETO SUPREMO N° 013-2023-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), se crea el SEIA, como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión;

Que, el literal b) del artículo 1 de la Ley N° 27446 establece que dicha norma tiene como objeto, entre otros, el establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión;

Que, el literal f) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, establece como una de las funciones específicas del Ministerio del Ambiente dirigir el SEIA;

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual contempla el principio de eficacia que implica la capacidad para hacer ambientalmente viables las políticas, planes, programas y proyectos de inversión propuestos, haciendo prevalecer la finalidad de los mismos, mediante la determinación de medidas de prevención, control, mitigación, recuperación y eventual compensación, acordes con criterios de economía, simplicidad y celeridad, así como con la legislación vigente y la debida protección del interés público;

Proyecto de decreto supremo que le quita facultades al Senace en la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental.

de dos proyectos de decretos supremos que se oficializarían este 28 de julio. Las medidas apuntan a debilitar al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), organismo encargado de evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos de inversión más grandes del país. Lo que se pretende es fortalecer las decisiones de Energía y Minas.

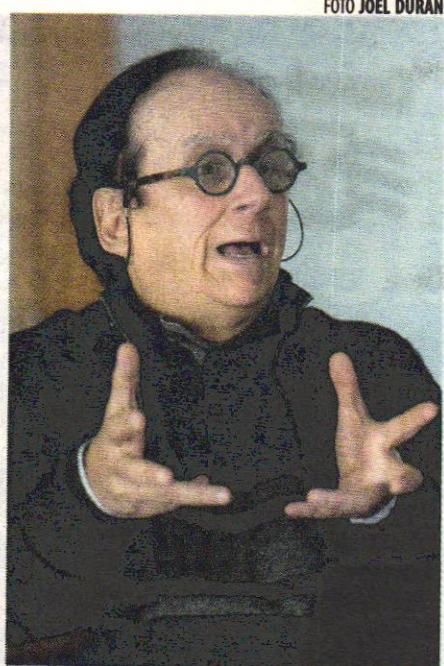
"En el fondo se busca debilitar a la institución que revisa los estudios de impacto ambiental, reducirla a su mínima expresión, sobre todo en el sector minero. Y esto

lo hará cada sector -Energía y Minas, si es un proyecto minero; Transportes, si es un proyecto vial-. Y eso es un debilitamiento del Senace que podría generar escenarios poco transparentes", dice el exviceministro del Ambiente Mariano Castro.

La propuesta también contempla la renovación automática de los permisos para usos de agua, desvío de ríos o incluso para desboscar. Como ese permiso tiene una vigencia, renovarlo requiere una nueva evaluación de las condiciones del territorio. "No va a haber una evalua-



"Van a regularizar la situación de ilegalidad en la que estaban algunas empresas sin determinar impactos ni medidas para paliar los daños ya hechos", dice Ana Leyva, abogada de CooperAcción.



"El gobierno está asumiendo un discurso que viene del sector empresarial y que no es nuevo", dice José De Echave, investigador de CooperAcción.



"En el fondo se busca debilitar a la institución que revisa los Estudios de Impacto Ambiental, reducirla a su mínima expresión sobre todo en el sector minero", dice Jaime Borda, secretario ejecutivo de la ONG ambientalista Red Muqui.

ción para ver si las condiciones sobre las que se les dio ese título aún existen. ¡Y esas condiciones pueden cambiar!", dice Ana Leyva, abogada de CooperAcción.

Las empresas tampoco necesitarán permiso para entrar a los territorios y realizar estudios preliminares en los ecosistemas como la extracción o la captura temporal de especies, todo lo cual requeriría la autorización de entidades como Serfor o Imarpe.

"Estas entidades autorizan la realización de esos estudios porque se trata de ecosistemas sensibles. Para eso hay una guía. Lo que propone la resolución, sin embargo, es que, hasta que no se actualice esa guía, la autorización es inmediata", explica Ana Leyva. El problema —agrega Leyva— es que "la actualización de esa guía depende del Minam, que está más interesada en promover los proyectos".

La abogada de CooperAcción también advierte que las empresas pueden salir impunes de los daños ambientales que hayan causado. Para "regularizar" esos impactos, el Ejecutivo ha propuesto que las compañías puedan presentar Planes Ambientales Detallados (PAD). "Cuando quieres hacer un cambio en tu proyecto, tienes que solicitar una modificación del Estudio de Impacto Ambiental o hacer un informe técnico. Pero hay empresas que no lo hacen. Por lo tanto, están actuando ilegalmente. Los PAD les permitirán regularizar esta situación de ilegalidad

en la que estaban, sin determinar impactos ni medidas para paliar los daños ya hechos", dice la especialista.

Las propuestas se suman a otros tres decretos que fueron publicados entre diciembre y junio pasados. Entre las medidas que ya están en marcha figura la reducción del plazo de diez a cinco días para admitir a trámite los EIA presentados por las empresas sin siquiera robustecer los equipos de evaluadores. "Los plazos pueden ser cortos, expeditos. Pero no puede ser que, pese a esto, no se fortalezca a las entidades, porque se necesita equipos humanos especializados",

critica Mariano Castro.

Los especialistas señalan que muchas veces la demora no depende del Senace sino de las mismas empresas que presentan documentación insuficiente. "Hay evidencia de que los EIA que presentan son de muy baja calidad y están hechos bajo el supuesto que no van a ser revisados con rigurosidad", afirma José de Echave, investigador de CooperAcción.

Por si fuera poco, a fines de junio el Ministerio de Energía y Minas aumentó la capacidad de producción diaria de las minas sin considerar las alteraciones ambientales de ello. "Esto acarrea un

aumento de desechos, desmontes y relaves sin que se tenga que calcular el impacto que ello supone", advierten desde CooperAcción.

FALSO DISCURSO

"Las modificaciones que se están haciendo apuntan a no esperar las opiniones técnicas de los órganos especializados, a no dar una evaluación de fondo de los estudios de impacto ambiental. Todo esto tomó fuerza desde que asumió Dina Boluarte", opina Beatriz Cortez, abogada de la Red Muqui.

Para justificar este "paquetazo" el ministro del Ambiente ha repetido el viejo estribillo

SUTRECA
Senace

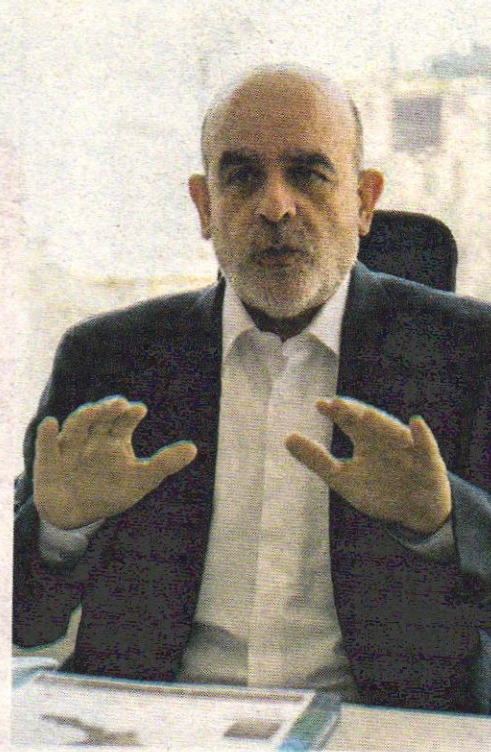
PRONUNCIAMIENTO

EN DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL SENACE

Ante las decisiones y declaraciones del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, y el presidente ejecutivo (e) del Senace, Yury Alfonso Pinto, en diferentes medios de comunicación, sobre el rol del Senace en el proceso de certificación ambiental, que afectan la credibilidad y legitimidad de nuestra institución, el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (Sutrecas-Senace), manifiesta lo siguiente:

1. Ambos funcionarios, en diferentes medios de comunicación y oportunidades, han cuestionado el proceso de certificación ambiental, ya que indicaron que no se cumple lo que dice la ley, que la admisibilidad de los estudios de proyectos de inversión se demora entre 4 a 8 meses y que estos obtienen la viabilidad ambiental entre 4 a 6 años.¹
2. Rechazamos rotundamente dichas expresiones, pues no se ajustan a la verdad y solo buscan menoscabar la labor del Senace y de las entidades técnicas vinculadas al proceso de certificación ambiental. Es esencial aclarar a la ciudadanía que, según datos disponibles, los tiempos promedio de admisibilidad y evaluación de proyectos en el Senace son accesibles mediante el portal "Senace en Cifras".²
3. Desde 2015, el Senace ha evaluado con rigor técnico y transparencia la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión más relevantes y complejos del país. Esta labor ha fortalecido la confianza pública y privada en la institución y en el proceso de certificación ambiental, promoviendo, además, la participación ciudadana efectiva.

El 16 de julio el sindicato de trabajadores CAS del Senace emitió un comunicado desmintiendo el discurso del ministro. "No se ajusta a la verdad", señalaron.



"Los plazos pueden ser cortos, expeditos. Pero no puede ser que no se fortalezca a las entidades", dice el exviceministro del Ambiente Mariano Castro.

de "la tramitología". "Hoy en día el Perú ha superado largamente esos plazos previstos en la ley, hoy estamos aprobando un estudio de impacto ambiental entre tres a cinco años. Eso nos vuelve un país no competitivo frente a los demás países de América Latina", dijo en abril de este año.

El discurso no encuentra asidero en la realidad. La ONG CooperAcción ha analizado 13 proyectos de envergadura, 10 de los cuales aprobaron sus EIA o las modificaciones de este en menos de un año. "Hemos ido a revisar los grandes proyectos de inversión, porque supuestamente son los más complejos, los que demandarían revisiones. Cuando uno revisa ese grupo, se encuentra con una realidad que no coincide con el discurso central", dice José De Echave, investigador de CooperAcción.

Exfuncionarios del Minam coincidieron con el análisis de esta ONG en un reciente conversatorio organizado por el Colegio de Ingenieros de Lima. "Yo no encuentro información que señale que la admisibilidad demore entre cuatro u ocho meses o que para dar la viabilidad a los EIA se tarde entre cuatro y seis años. Eso no está en los reportes oficiales", expuso el exviceministro Mariano Castro.

El mismo sindicato del Senace publicó hace unos días un comunicado desmintiendo al ministro. Los trabajadores denunciaron, además, que la entidad lleva dos meses acéfala porque no se ejecuta el nombramiento del presidente ejecutivo, a pesar de que el concurso público para ese cargo ya tuvo un ganador.

"Un ministro lo que tiene que hacer es fortalecer su sector, pero no lo quiere hacer. Todo lo contrario. Por eso está prolongando el descafeinamiento de esta institución", apunta Jaime Borda.

"El gobierno está asumiendo un discurso que viene del sector empresarial y que no es nuevo. En los últimos diez años ya el Estado ha retrocedido, ya se ha flexibilizado y acortado plazos, pero el discurso sigue. Y si todo esto se concreta, vamos a estar más lejos de la OCDE, que tiene una serie de requisitos y obligaciones en materia ambiental", advierte José De Echave. ■

La llamada de la tribu

Este semanario se propuso pisar todos los callos posibles y ha llegado a ser, en efecto, una incomodidad. Ni el gobierno ni los grandes intereses nos quieren. Tampoco los políticos corruptos, los empresarios que cortan el jamón, los partidos políticos de fachada, las fuerzas del orden implicadas en denuncias sobre derechos humanos violentados, la izquierda bamba y el senderismo reciclado. Todos ellos nos quisieran desaparecer y por eso esperan, con alegría, que la piratería sistemática de nuestros contenidos y el descenso del poder adquisitivo de la gente terminen con esta aventura empezada en el 2010. Por eso es que este periodismo cercado, que es el nuestro, necesita ahora, más que nunca, de sus lectores. Queremos seguir cumpliendo con nuestra tarea. Ayúdanos a continuar.



Plutón Editores S.A.C.



Dona aquí con Yape

975 525 500

(Código QR SÓLO para donaciones)

Le bajaron el dedo



DANIEL ESPINOSA

En el artículo de "Jacobin" se indica que esta proclividad a la mentira nunca fue incorporada a la narrativa mediática, incluso cuando la prensa "liberal" decía estar atenta a las mentiras en la política debido a Trump, otro conocido mentiroso.

Por si todo eso fuera poco, Biden dedicó su carrera a imponer políticas neoliberales. Ellas vaciaron el sistema democrático de contenido, favoreciendo el auge de unas derechas reaccionarias que supieron aprovechar el descontento masivo. En 1999 y en su calidad de senador, Biden votó a favor de la iniciativa legal que desmanteló las leyes aprobadas en 1933 a raíz de la Gran Depresión, diseñadas para separar la banca comercial de la banca de inversiones. Este crimen en contra de la economía estadounidense y mundial preparó el terreno para el colapso financiero de 2008.

Sí, Biden es conservador —como Trump—, pero la necesidad de presentarle al mundo la ilusión de pluralidad política ha llevado a la gran prensa y al resto de instituciones tradicionales a disfrazarlo de liberal, cuando no de progresista. Biden entiende el juego y sabe que tiene que hablar como liberal mientras avanza la agenda elitista de Wall Street y promueve las agresiones bélicas del complejo industrial-militar. Que miles de periodistas puedan sostener, sin caer en el ridículo, que Biden es "de izquierda", es un verdadero milagro de la propaganda.

La gran prensa negó el declive cognitivo de Biden

durante años, atribuyendo los rumores a sus enemigos y al Kremlin —más "propaganda rusa", decían—. La farsa terminó abruptamente con el vergonzoso debate presidencial del pasado 27 de junio, en el que el presidente de EE. UU. dio claras muestras de senilidad.

El pasado 18 de julio, la cadena de noticias CNBC informó sobre una reunión en la que 75 "donantes ricos" del Partido Demócrata, preocupados por la "calamitosa performance" de Biden en el debate, discutieron sobre "cuál sería el camino a seguir" para el candidato.

"Desde entonces", dice el artículo de la CNBC, "...los donantes que financian la candidatura de Biden... vienen llevando a cabo una campaña de lobby... su objetivo es convencer a los legisladores (demócratas) de conminar a Biden a abandonar la carrera (...). Muchos de estos donantes expresaron su posición de manera terminante: si Biden no renuncia, dejarán de apoyar con dinero su reelección a menos que las encuestas muestren que es el claro favorito para vencer a Trump".

Los dueños de la política estadounidense hablaron y Biden obedeció, por supuesto. ■

Joe Biden se ha retirado de la contienda electoral estadounidense. El anuncio fue hecho el domingo pasado a través de la red social que la gente sigue llamando "Twitter", para decepción de Elon Musk. Como era previsible, el lunes la prensa corporativa de Occidente y la periferia alineada se deshizo en editoriales elogiosos. Un par de ejemplos nacionales: "Es una gran lección de desprendimiento que le da al mundo (...). Un gesto que lo enaltece" ("La República"), "La decisión no debe haber sido fácil. Aunque tardía... habla bien de su carácter" ("El Comercio").

En Estados Unidos, la gran prensa llevó la farsa un paso más allá: "Biden ha tomado una decisión valiente...", dice el editorial de "The New York Times" publicado el mismo domingo de la renuncia. "La decisión del presidente Biden de retirarse de las elecciones presidenciales de 2024", añade el diario más importante del mundo, "es una coda apropiada para un hombre cuya vida ha estado dedicada al servicio público".

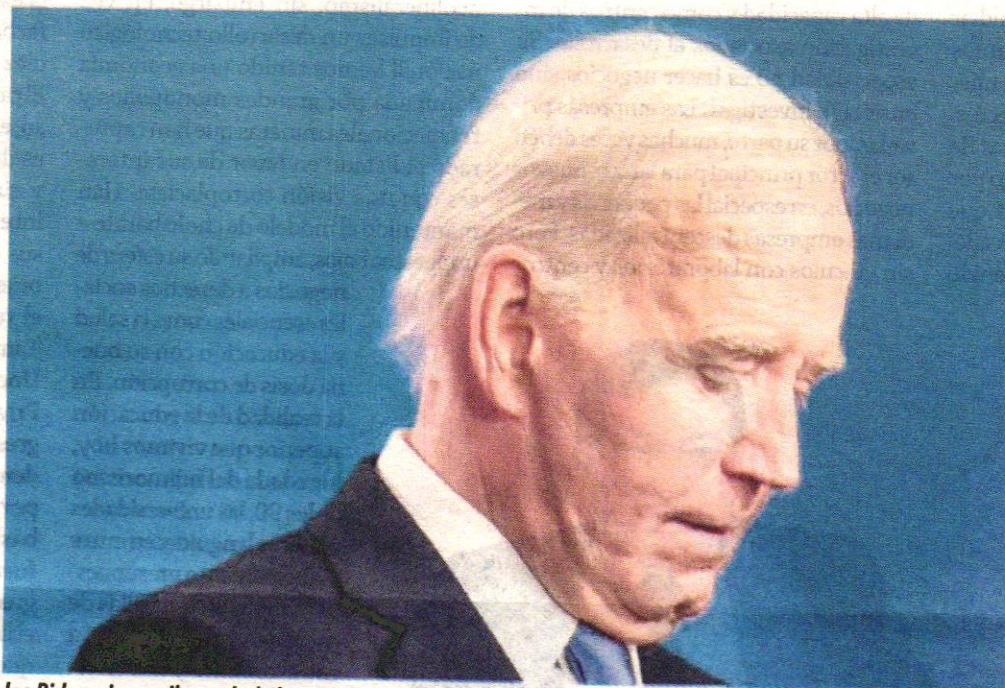
De ninguna manera: a "Genocide Joe" le bajaron el dedo los "megadonantes" del Partido Demócrata, los multimillonarios que controlan el ala izquierda de la política bipartidista estadounidense. No fue un gesto de magnanimidad o desprendimiento. Lo descartaron, como se hace con un par de calcetines viejos. Sin la plata de los megarricos no hay campaña (cada cuatro años, la "democracia" yanqui se gasta miles de millones en este márketing político. El circo electoral de 2020 fue el más caro de la historia: costó más de 14,000'000 000 USD (catorce mil millones de dólares).

Tampoco estamos ante un hombre que "dedicó su vida al servicio público". Como demócrata conservador, Biden fue clave en la instalación de un sistema carcelario draconiano que, desde hace décadas, se ceba con particular ferocidad en afroamericanos y latinos. El actual inquilino de la Casa Blanca también fomentó vigorosamente la desastrosa invasión de Irak de 2003 —y ha apoyado todas las guerras emprendidas o atizadas por su país durante las últimas décadas—. Desde octubre de 2023, el gobierno de Biden viene contribuyendo de

manera decisiva con el genocidio gazatí. Con gran hipocresía, la Casa Blanca intentó presentarse como una voz de la cordura, exigiendo treguas y acuerdos de paz solo para seguir apoyando al régimen Netanyahu incondicionalmente cuando este se negó caprichosamente a firmarlos.

Biden también promovió el "Patriot

Act", la ley que le permite al gobierno estadounidense espiar a sus propios ciudadanos a placer y encarcelar a cualquiera que pueda catalogar como "sospechoso de terrorismo", de manera indefinida y sin juicio de por medio. No solo eso, el actual presidente de EE. UU. se ha pasado las últimas dos décadas alardeando de haber sido el verdadero redactor



Joe Biden: si no se iba, se habrían quedado sin financiamiento.

de esta controversial acta: "Yo redacté una ley contra el terrorismo luego de (el atentado de 1994 de) Oklahoma City", le dijo a la revista "New Republic" en 2001, "...y la ley que John Ashcroft elevó fue la mía" (Ashcroft fue Fiscal General entre 2001 y 2005 y, como cabeza del Departamento de Justicia de George W. Bush, fue el principal responsable en el diseño y la aprobación del controversial "Patriot Act").

Pero hay que tomar con pinzas todo lo que dice Joe Biden, pues estamos ante un mentiroso consuetudinario. En febrero de 2020, el desorientado líder del "mundo libre" aseguró haber sido arrestado en la década de 1970 mientras intentaba visitar a Nelson Mandela, entonces en prisión en Sudáfrica. Los verificadores de contenido lo desmintieron de inmediato. En 1988, "Genocide Joe" se presentó a las elecciones presidenciales de su país; según la revista "Jacobin" (30/03/20), su candidatura naufragó, en parte, debido a su proclividad a la mentira y a un escándalo de plagio: luego de un mitin se reveló que había copiado, palabra por palabra, el discurso de un laborista británico llamado Neil Kinnock.

75 "DONANTES RICOS" DEL PARTIDO DEMÓCRATA, PREOCUPADOS POR LA "CALAMITOSA PERFORMANCE" DE BIDEN EN EL DEBATE, DISCUTIERON SOBRE "CUÁL SERÍA EL CAMINO A SEGUIR"

Aguando el caldo

28 de julio, momento para pensar el país. Escojo olvidarme por un momento de Dina y del congreso y mirar más al futuro. La mayoría de familias y trabajadores peruanos trata de progresar con mucho esfuerzo propio, contra viento y marea, a menudo aprovechando nuevas tecnologías del mundo. Pienso en Wilber, joven de una comunidad cusqueña que, tras estudiar para experto en soldadura y estructuras metálicas, siguió capacitándose en nuevas técnicas y en gestión de proyectos. Pienso en las familias en las alturas de Calca que han implementado riego por goteo en una chacra diversificada que incluye fresas y rosas para el mercado, cultivos que nunca antes habían tenido y que han adaptado a su zona.

Así van produciendo un avance tecnológico nacional, indispensable para un desarrollo sostenible.

Todas las regiones del Perú, sin excepción, cuentan con condiciones geográficas especiales y una gran biodiversidad que ofrece la posibilidad de sacar nuevos productos, avanzar en la industrialización y añadir valor de nuevas formas. El cacao podría exportarse como chocolate de alta calidad, dado que tenemos cacao orgánico y de diversas variedades. Frutas que durante siglos no supimos que podían producirse en el Perú, como los arándanos, o con variedades nuevas como la palta Hass, han surgido, pero, ¿cuántas otras podríamos estar sacando, vendiendo internacionalmente, conquistando nuevos mercados? No sólo el agro: hay grandes atractivos turísticos desaprovechados en provincias, al mismo tiempo que Machu Picchu se está sobreexplotando con beneficios concentrados en unos pocos, en particular por el monopolio abusivo del tren de López-Aliaga.

Contamos con la iniciativa de profesionales peruanos que han impulsado importantes desarrollos. A pesar de estos esfuerzos valiosos, la velocidad a la que se producen esas innovaciones, en comparación con las oportunidades que tenemos y el crecimiento que necesitamos, es insuficiente. En el mundo, los países que han logrado un desarrollo económico acelerado son aquellos que han conseguido adaptar nuevas tecnologías internacionales a su realidad, avanzando en innovaciones. China, Japón, Corea del Sur, por dar algunos ejemplos, lo han hecho con mucha iniciativa del Estado

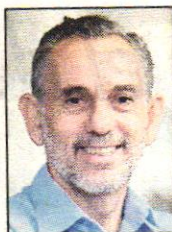
generando 'ecosistemas de innovación', financiando y promoviendo una relación fructífera entre universidades, centros de investigación y empresas privadas. En el Perú, dadas nuestras condiciones geográficas y culturales, tenemos que trabajar mucho en ese sentido: somos únicos y por eso adaptar e innovar es vital, particularmente en la sierra y selva.

Las universidades son esenciales en ese esfuerzo, formando profesionales de alta capacidad y como centros de investigación asociados al desarrollo. Su especialidad no es hacer negocios sino enseñar e investigar. Las empresas privadas, por su parte, muchas veces deben ser el actor principal para lanzar nuevos negocios, en especial las pequeñas y medianas empresas descentralizadas. Pero sin vínculos con laboratorios y centros



José Luna: ahora podrá aspirar al licenciamiento permanente.

POR EL CAMINO DE ESTE GOBIERNO DEL CONGRESO MAFIOSO Y SU TÍTERE BOLUARTE, VAMOS MARCHA ATRÁS



PEDRO FRANCKE

de innovación apoyados por el Estado no pueden llegar muy lejos. Necesitamos una relación fructífera entre el Estado, las universidades y los emprendedores, con un esfuerzo nacional por investigar cómo aprovechar mejor, económica y socialmente, nuestros recursos naturales y culturales. Hoy en día, las nuevas tecnologías internacionales nos abren muchas más oportunidades al respecto.

Durante los últimos treinta años de neoliberalismo, sin embargo, en vez de impulsar un desarrollo tecnológico nacional hemos tenido una economía dominada por grandes monopolios y trasnacionales mineras que han capturado el Estado en favor de sus intereses con una visión cortoplacista. Han mantenido el modelo de cholo barato e impuestos bajos, ampliando su esfera de

negocios a derechos sociales esenciales como la salud y la educación con su buena dosis de corrupción. En la realidad de la educación superior que vivimos hoy, heredada del fujimorismo de los 90, las universidades públicas languidecen entre el ahogamiento presupuestal y algunas camarillas de mente estrecha. Debido a ese abandono y a la enorme demanda de educación universitaria, por parte de las familias peruanas buscando un futuro mejor para sus hijos, proliferaron universidades-negocio, la mayoría de ellas de baja calidad y sin ningún aporte de nuevo conocimiento. En vez de centros de educación superior comprometidos con el desarrollo regional y nacional, que den oportunidades para todos de acuerdo a sus capacidades y no a su posibilidad de pago, hemos tenido fábricas de egresados mediocres.

La reforma de la educación superior iniciada una década atrás, con la Sunedu estableciendo requisitos mínimos de calidad, promovió que las universidades formaran buenos profesionales e investigaran. Fue separando la paja del trigo que incentivó a que decenas de estos centros de enseñanza superior mejoraran su calidad de enseñanza e investigación. Faltaba, sin embargo, otro elemento fundamental para un sistema universitario realmente conducente al desarrollo nacional: un reforzamiento y reforma de las universidades públicas, promoviendo igualdad de oportunidades y

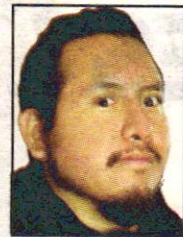
asegurando su calidad, ampliando su alcance con un buen sistema de becas y sedes en nuevas provincias, y organizando un sistema de investigación y desarrollo de las que estas formaran parte.

La contrarreforma de este congreso dominado por las mafias se ha traído abajo lo positivo de la reforma de la Sunedu. Llegan ahora al extremo del retroceso destructivo con su proyecto del "licenciamiento permanente", fórmula para que cualquiera de estos negocios mafiosos logre—por las buenas o por las malas—un visto bueno y de ahí ya hagan lo que quieran, rebajando la calidad, abriendo mercados en garajes o puestos de mercado para hacer plata como cancha. Hay congresistas muy interesados en esto, empezando por José Luna, dueño del partido Podemos y de la exuniversidad Telesup que era pura fachada y no cumplía ni una sola de las diez condiciones de calidad requeridas. El candidato de APP a presidir el congreso, el exfujimorista José Elías, también es dueño de una universidad-negocio y sin duda tiene varios millones de intereses en esta reforma. Cerrón y sus compinches comparten la misma orientación política. Han apoyado todo el retroceso en la reforma educativa. También tienen intereses de por medio. Uno de los dueños de la Universidad Privada del Centro fue candidato al congreso por Perú Libre. El 2020 la Sunedu denegó el licenciamiento a esa empresa por no tener las condiciones de calidad básica. Ahora, luego de que la Sunedu fuera capturada por el cogobierno congresal del fujicerronismo, les han dado el licenciamiento. Y ahora Cerrón apoya que nunca más se le exija nada a esos negociantes de la educación sin calidad.

Al mismo tiempo, estos congresistas malhadados han optado por hacer demagogia barata "aguando el caldo" de las universidades públicas. No se han preocupado por asegurarles presupuesto, mejorar sus condiciones de gobierno o promover la investigación. No han optado porque las universidades públicas de calidad, que las hay varias, se expandan hacia nuevas localidades o encabezen redes de mejora de calidad e investigación en sus mejores especialidades. Lo que han hecho es aprobar leyes de creación de un montón de nuevas universidades. ¿Con presupuesto? No. ¿Con calidad? Tampoco. ¿Asegurando buen gobierno? Menos. Pura demagogia, nada más.

Por el camino de este gobierno del congreso mafioso y su títere Boluarte, vamos marcha atrás. Se profundiza la privatización de la educación superior, el modelo del fujimorismo, donde proliferan universidades sin calidad, sin investigación ni innovaciones. Es decir, la política del "libre mercado" que abre las puertas a negocios turbios. Es el camino del atraso tecnológico, del desaprovechamiento de nuestras riquezas naturales y culturales, de la desigualdad y la corrupción. ■

Llorar por la izquierda



CARLOS LEÓN MOYA

Al cerrarse la inscripción de afiliados que podrán participar en las elecciones presidenciales del 2026, y ver lo que presenta la izquierda esta vez, solo me aparece una sensación: desazón. Desde ya, sé que mi única opción electoral será “cualquier cosa que esté contra el fujimorismo y todo lo que se le parezca, que son casi todos”, debido a que no podré votar por la izquierda por pura convicción.

Y es que sus opciones políticas son eso, la desazón pura. Todas han tenido representación presidencial o parlamentaria reciente, así que ni se les puede acusar de inexperiencia. Todo lo contrario: es su actuación actual la que los vuelve tan deprimentes. Si antes la izquierda peruana generaba expectativa, es porque no había gobernado, pero una vez en el gobierno mostró que mejor se hubiese quedado en expectativa.

Por un lado, están dos opciones que no tienen representación parla-

mentaria actual: Antauro Humala y los rezagos que aún creen que Pedro Castillo fue una pobre víctima de un golpe de Estado. Antauro Humala tiene grandes opciones, sin duda. Es el único carismático del grupo. Representa la rabia, a pesar de todo (una rabia chiflada). Pero Antauro Humala está hecho del mismo material maleable que el resto del elenco. Cuando tuvo una bancada, en el año 2020, se convirtió en un César Acuña con un cóndor multicolor de fondo. ¿Para eso se levantó en armas, para hacer alianzas con Manuel Merino?

En el caso del castillismo, el solo hecho de decir aún que Castillo no dio un golpe de Estado porque “solamente lo enunció en un Mensaje a la Nación” merece bastante desprecio. El radicalismo verbal esconde, muchas veces, la añoranza por el puesto en el gabinete, por la atención pública inmerecida.

Por otro lado, están dos opciones que sí tienen representación parlamentaria: Perú Libre y el Nuevo Perú.

De Perú Libre casi no hay nada que decir. Ya qué importa que hayan cobrado coimas por sacar brevets en Junín. Ahora mismo Waldemar Cerrón va a compartir la mesa directiva del Congreso con Patricia Juárez y Alejandro Cavero; Vladimir Cerrón está prófugo; y Kelly Portalatino, aparentemente enamorada de él, lo ayuda a escapar de la policía, pero lo sigue llamando doctor. ¡Doctor! Nada más gamonal y huachaflo a la vez. Además, esconder la comisión de un delito con la retórica de “me atacan porque no quieren que defiendan a los trabajadores y a las víctimas de las masacres” es de una bajeza vomitiva. Enamorarse está bien, pero usar muertos y derechos laborales como cortina ideológica para taparlo es demasiada miseria. Preferiría que sigan cobrando coimas.

En cambio, Verónica Mendoza sigue sin responder la misma pregunta sobre Venezuela después de ocho años. Lo peor es que la respuesta a “apoya o no al oficialismo de Nicolás Maduro” es cada vez más fácil: siete

millones de desplazados, un país en ruinas, una corrupción rampante. ¿Cómo decir que “sí”? Pero la respuesta es “no sé”, no soy de aquí ni soy de allá. Es cierto que Mendoza tuvo un mensaje claro y tajante contra el golpe de Estado de Castillo –y como todo en la izquierda está al revés, hay gente que se lo saca en cara–. Sin embargo, durante gran parte de ese gobierno permaneció en silencio. Como si le costase afrontar los temas álgidos para no descontentar a sus bases que, en verdad, ni existen.

Punto aparte es el esencialismo del “buen vivir” que utiliza su partido, como si en las zonas rurales del Perú hubiese comunidades indígenas impolutas, cooperativas, sacadas del ayllu de Mariátegui, que bendicen y cuidan la Pachamama que habitan, y no ciudadanos con problemas económicos cotidianos y concretos que buscan, por ejemplo, los rápidos e ingentes ingresos de la minería ilegal a costa del deterioro de sus tierras, las cuales, tristemente, los condenan a la pobreza. Los ciudadanos de las zonas rurales son ciudadanos, y no postales de José Sabogal.

Aparentemente no hay nada en la izquierda hacia el futuro. Al menos no en la agrupada. Una vez más, sigo siendo de izquierda a pesar de la izquierda. Quizá solo queda mirar al frente, hacia la primera bomba lacrimógena que lance la policía en fiestas patrias, para llorar con ella. ■

Resolución histórica



RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE

Con solo un día de diferencia el Parlamento israelí aprobó una declaración crucial y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una resolución histórica. El voto del órgano político israelí y la decisión del órgano jurídico de las Naciones Unidas van en sentido contrario, ejemplificando cómo Israel se mueve a contracorriente del derecho internacional.

El 18 de julio pasado la Knesset (el Parlamento israelí) aprobó por una amplia mayoría (68 votos a favor y 7 en contra) una declaración rechazando explícitamente la creación de un Estado palestino en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, que según el texto aprobado están “en el corazón de la Tierra de Israel”.

Pero un día después, el 19 de julio, la CIJ determinó que el Estado judío debía poner fin a “su presencia ilegal en los Territorios Palestinos ocupados”, acabar con la construcción de asentamientos, eliminar los ya existentes y devolver la tierra y los bienes inmuebles incautados a los palestinos “desde que comenzó la ocupación en 1967”.

La decisión de la CIJ, aunque no tiene efecto vinculante al ser una opinión consultiva, es histórica por ser la primera vez que se pronuncia al respecto. La resolución va en la misma línea (incluso va más allá) de las resoluciones que el Consejo de Seguridad de la ONU viene emitiendo desde hace más de 50 años condenando la colonización de los territorios ocupados.

La respuesta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no se hizo esperar: “el pueblo judío no es conquistador en su propia tierra: ni en nuestra capital eterna, Jerusalén, ni en la tierra de nuestros antepasados en Judea y Samaria” (Cisjordania) y “ninguna decisión falsa en La Haya distorsionará esta verdad histórica”. En suma, el recurso al argumento religioso e histórico (de una historia remota acaecida entre los años 1000 a. C. y los dos primeros siglos de la era cristiana), como supuesta fuente de derecho en el mundo actual, por encima de la legalidad internacional y del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino que lleva siglos viviendo allí.

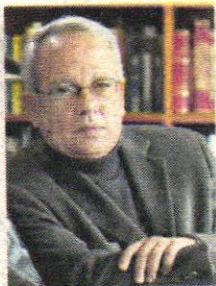
La reciente declaración aprobada por la Knesset echa por tierra la solu-

ción de los dos Estados, promovida incluso por los más estrechos aliados de Israel.

Ya son 145 países (de los 193 miembros de la ONU) que reconocen al Estado palestino. Pero la mayoría de las potencias occidentales se resisten a hacerlo (a pesar de impulsar la solución de los dos Estados en teoría) arguyendo que debe ser el fruto de las negociaciones bilaterales entre Israel y los palestinos. Conceden así, en la práctica, un poder de veto a Israel.

Como ha señalado la analista política israelí Dahlia Scheindlin: “Necesitamos dejar de aceptar la retórica israelí de que existe un Estado palestino de forma unilateral. Lo que tenemos es un reconocimiento multilateral del Estado palestino y un rechazo unilateral de Israel”. El voto mayoritario de la Knesset el 18 de julio lo confirma una vez más.

Cabe preguntarse hasta cuándo las potencias occidentales continuarán con el juego tramposo de apoyar un futuro Estado palestino condicionando su reconocimiento a la aprobación de Israel, cuyo gobierno ha mostrado repetidamente su negativa a la solución de los dos Estados reconocida por toda la comunidad internacional. ■



Día de la independencia

En el país inexistente de la presidenta holográfica, el Congreso de los forajidos aplaude y confirma.

La señora que va a Palacio describe centenares de obras supuestamente realizadas, proyectos que serán decisivos, inversiones urgentes que cambiarán la faz de la patria y garantizarán el progreso, el orden y la paz social. (Grandes aplausos).

La aplauden y celebran miembros del partido del mundialmente único analfabeto funcional que ha fundado universidades masivas, la organización heredera de la década sin ley, la fachada de Pepe Luna, lo que sobró de la parrillada de Perú Libre, los felipillos de Vox y un surtido etcétera de arrastrados.

Festejan a Boluarte porque de ese modo le agradecen que se haya prestado a la farsa de este gobierno ilegítimo. La tratan formalmente como presidenta sabiendo que no lo es ni por asomo y que son ellos, representantes del crimen organizado, quienes han reformulado la constitución de 1993 y disparado el desbalance fiscal.

La señora que va a Palacio dice sus mentiras en el discurso ritual del 28 de julio, el ilusorio día de la independencia de esta comarca estafalaria.

Y hay bandas que tocan marchas, cornetas de recibimiento, talones que suenan a reconocimiento, ceremonias de recibo. Los peruanos amamos la farsa. El gobierno actual es la enésima reencarnación de la locura republicana que creamos hace dos siglos.

Nos libramos felizmente de los españoles y elegimos el desorden. Hemos vivido en él con gran gusto y ahora, después de muchas batallas perdidas, tenemos lo que sembramos: un remedo de país que tiene el 70% de su economía sumergido en la informalidad, una derecha soez que ha borrado la memoria de su complicidad, una izquierda sin padre ni madre que no sabe qué quiere, un crecimiento que depende del precio de los metales.

Y lo más importante: una dramática carencia de ciudadanía. Arriba y abajo, da lo mismo: el concepto del bien común está ausente, el egoísmo rige, la inclinación por la salida fácil y fuera de la ley está a flor de piel.

No somos un gran país, como nos quieren hacer decir. Somos un país mediano que nació como una gran promesa pero que ahora, dos siglos después de la felicidad del parto poscolonial, involuciona sin pausa. Lo dice nuestra política, nuestra cultura, nuestras instituciones, el régimen actual.

Somos el país que dentro de dos años, cuando esta tragicomedia termine formalmente, tendrá que elegir entre zombis y cretinos, entre megalómanos y caudillos de bolsillo, entre ladrones y jefes de cárteles. O entre el fu-

NO SOMOS UN GRAN PAÍS, COMO NOS QUIEREN HACER DECIR. SOMOS UN PAÍS MEDIANO QUE NACIÓ COMO UNA GRAN PROMESA PERO QUE AHORA, DOS SIGLOS DESPUÉS DE LA FELICIDAD DEL PARTO POSCOLONIAL, INVOLUCIONA SIN PAUSA

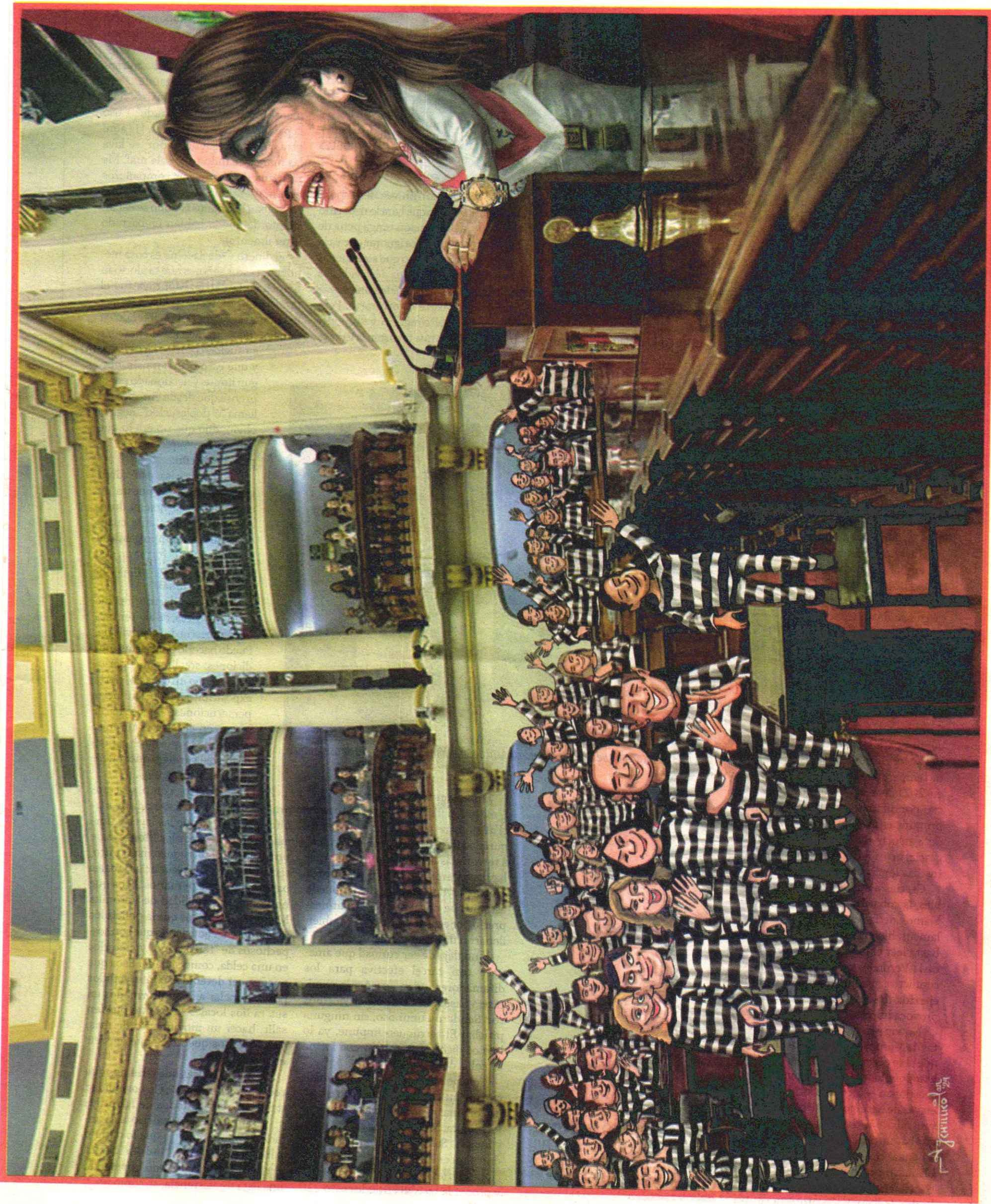
jimorismo y el antaurismo, que son las dos versiones extremas de la decadencia.

No importa lo que diga la señora que va a Palacio. No importa que quienes la aplaudan simulen ser congresistas cuando, en realidad, son carne de presidio. No importa qué prontuarios se hayan esgrimido para ocupar los puestos directivos del Congreso.

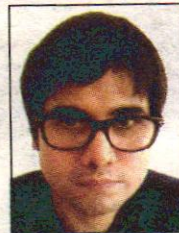
El problema del Perú es que somos un país delusorio. Nuestro símbolo patrio no es la cornucopia de la abundancia sino los millones de viviendas sin terminar, las varillas sobresaliendo, los pisos prometidos, los aires que habrán de conocer nuestro empeño apenas se pueda. Para nosotros, el futuro siempre será una coartada. Y la esperanza, nuestro fentanilo.

Lo que deberíamos hacer es declarar nuestra verdadera independencia personal: liberarnos de las taras que nos aturden. ■





Reírnos de Jorge Montoya



JUAN MANUEL ROBLES

Qué risa que da el congresista Jorge Montoya, almirante en retiro, caricatura andante y emblema de lo más penoso de la tradición militar. Es de esos hombrucos con voz engolada que tratan de irradiar miedo pero dan lástima. Porque uno intuye rápidamente lo que se confirma en la hoja de vida: ningún acto sorprendente o admirable. Y —lo que es grave en su línea de trabajo— nada de heroísmo; a lo mucho, uno encuentra el valeroso acto de agacharse dócilmente a firmar el acta de sujeción de Vladimiro Montesinos. Hagamos un alto aquí: el señor ha dicho que no era un acta, que era la firma de una “lista de asistencia”; y sin embargo, en el video transcrito, el general César Saucedo —cabecilla castrense de aquella mafia criminal— anuncia a sus grumetes que van a firmar “el acta” con los acuerdos; esto fue tan evidente que en 2001 el Ejército del Perú admitió que esa ceremonia de sujeción fue una vergüenza para la institución. Pero Montoya, negacionista temperamental, decidió en 2021 que iba a denunciar por difamación a todo aquel que pronuncie “acta de sujeción”, sacando a relucir ese rasgo que, por desgracia, no es infrecuente en él y en su institución: la cobardía.

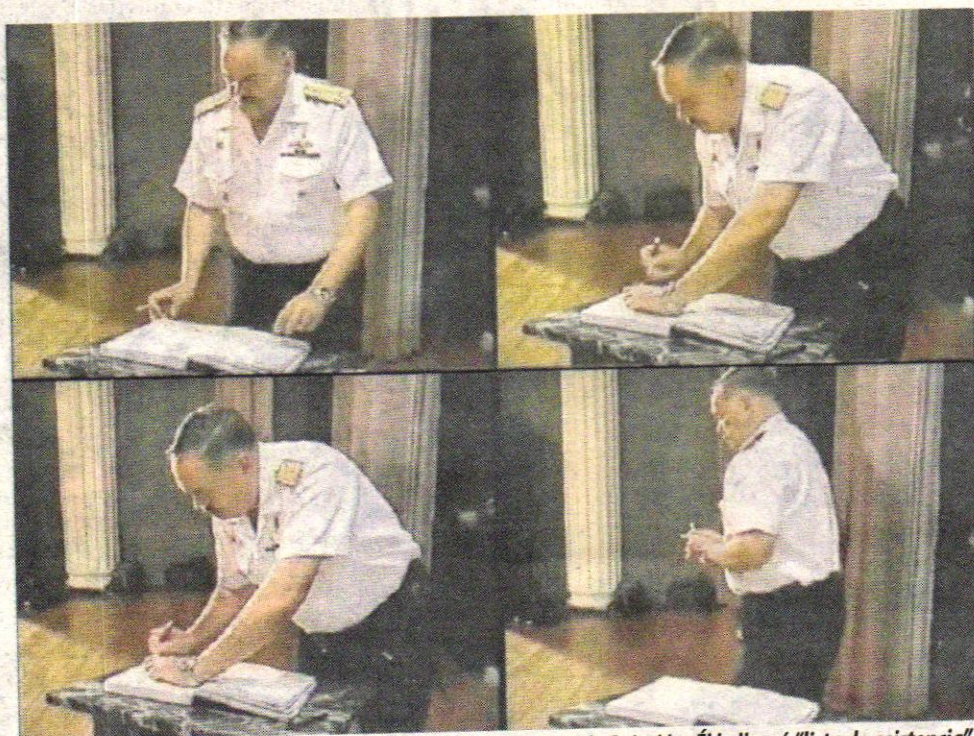
Gracias a sus miembros indeseables, la cobardía está allí cuando hablamos de la Marina de Guerra. Es, lamentablemente, un lugar común. Basta leer el informe de la Comisión de la Verdad o ver películas sobre el conflicto armado interno. La cobardía ejercida desde el poder es feísima y provoca horrores. Lo sabemos bien.

No son pocas las amenazas y bravatas de Montoya, siempre con un tonito que él se permite por su condición militar y que los periodistas sumisos no le cuestionan —al contrario, se lo toleran en vez de hacer lo que deberían: reírse y mandarlo a echarse agua—. Cada vez que hay un problema, el parlamentario amenaza con una acción de fuerza. La última: ha hecho una denuncia penal contra Verónica Mendoza por el solo hecho de llamar a la protesta contra

un régimen responsable de asesinatos, un régimen del que, por cierto, el almirante es aliado y cómplice.

Semanas antes, Montoya se molestó porque los periodistas le preguntaron acerca de la designación de su hijo como agregado militar en Estados Unidos, a pesar de no tener el rango que usualmente se requiere para el puesto. ¿Era acaso un premio de Dina Boluarte por

su apoyo político? En vez de responder, Montoya dijo que hará lo necesario para que la difamación tenga pena de cárcel efectiva (parece ignorar que ya la tiene). Lo veo y pienso que son nuevos tiempos: en cierta etapa de la vida, los uniformados ya no pueden amenazar con desaparecerte o torturarte. Pero pueden usar el congreso y su poder para hacer leyes que te corten la lengua.



Jorge Montoya, más uniformado que nunca, firmando el Acta de Sujeción. Él la llamó “lista de asistencia”.

¿Parece un poco fuerte ese paralelo? A mí no. Al fin y al cabo, Montoya es el mismo que presentó una ley de impunidad destinada a sacar de la cárcel a terroristas de Estado, entre los que hay carniceros, violadores, ejecutores y otras joyitas, por lo que se puede asumir que no siente particular desprecio por esos forajidos que también llenaron de sangre al Perú.

Y no deja de ser curioso que amenaza con cárcel efectiva para los difamadores quien acusó a la exministra Gisela Ortiz de tener vínculos con Sendero Luminoso, sin ninguna prueba. El terruqueo impune, ya lo hemos dicho, es también una forma de cobardía matona.

Pero no sólo hablamos de un fanático convencido y equivocado, un cruzado con una misión insana de limpieza ideológica. Montoya nos cuesta plata y mucha. Su iniciativa para tratar de desconocer los resultados de las elecciones en las que ganó Pedro Castillo y probar la tesis del fraude costó 216

mil soles. Como nunca hubo ni siquiera un indicio razonable, su investigación acabó en lo esperable: en nada. Confrontado frente al fiasco, el almirante dijo: “nunca hablé de fraude”. Pero mentira, sí lo hizo. Dijo: “existe realmente una intención de fraude”. Y usó la palabra fraude en Twitter. He aquí otra característica del señor: se lava las manos cuando todo sale mal. Me recuerda un poco a sus compañeros de armas en zona de emergencia, que se lavaban las manos cuando se daban cuenta de que la habían embarrado (literalmente).

El dinero —decía— no es cosa menor para estos señores que se alucinan héroes de la patria. Montoya fue el principal promotor de una ley para que los militares siguieran recibiendo su pensión de retiro a pesar de percibir su sueldo como congresistas, y que esto ocurriera sin ningún límite. Cuestionado por la prensa que desde entonces lo llama “el doublesuelo”, negó lo obvio, dijo que no era lo que parecía, y —qué raro— se puso bravucón.

Sí, me da risa este almirante de tina, su puesta en escena para hacerse el duro, el patriota combatiente, cuando al mismo tiempo gasta su energía en ver la forma en que le chupa la sangre al máximo al erario nacional.

Pero debo decirlo: reírme de Montoya es, de alguna manera, muestra de mi privilegio. Puedo hacerlo por ciertas condiciones: soy limeño y periodista, tengo un espacio, cierta exposición y puedo denunciar persecuciones. Puedo hacer lo que en el Perú es un lujo: reírme de lo que da risa, burlarme del verdugo que quiere quitarnos libertades.

Porque lo cierto, como se comprueba en esta nueva jornada de manifestaciones, es que las leyes y normas promovidas por los Montoya de turno, junto al terruqueo más cínico, terminan en consecuencias reales para millones de peruanos. Esos que no tienen la visibilidad de Verónica Mendoza. Esos a los que la policía los puede detener aduciendo que son sospechosos de “terrorismo” y meterlos en una celda, como si nada. Esos que pueden ser detenidos o intervenidos por denunciar a los uniformados en sus radios locales. Esos que pueden salir, hacer un movimiento de más, y morir. Esos que no se pueden reír en paz.

Una de las cosas que tenemos que recuperar como país es la posibilidad de poder reírnos todos de Montoya y sus alucines, y recordarlo a carcajadas por el momento que lo definió para siempre: con camisita blanca y charreteras, agachado, firmando una lista de asistencia, sí, cómo no. ■

EL TERRUQUEO IMPUNE, YA LO HEMOS DICHO, ES TAMBIÉN UNA FORMA DE COBARDÍA MATONA

El olvido de la nación



PEDRO CASUSOL

Resulta simbólico, por no decir sintomático, el olvido que pesa sobre el Archivo General de la Nación. Refundido durante más de ochenta años en los oscuros y húmedos sótanos de Palacio de Justicia, infestado de ratas, alimañas y todo tipo de hedores, las toneladas de papeles que constituyen más de 150 millones de documentos corren ahora el riesgo de desaparecer por su traslado a un almacén en el Callao, en plena zona industrial, cerca del mar y al costado de una fábrica de lejía. Esta medida responde a un desalojo judicial que tendrá que ejecutarse a más tardar en agosto, sin importar que esto ponga en riesgo el acervo histórico. ¡El triunfo de la burocracia descerebrada!

Ahora bien, tiene sentido que esto ocurra en un país donde, cada vez que se puede, se prefiere la amnesia antes

que la memoria, la estupidez antes que el conocimiento. ¿Qué es, en el fondo, la nueva "Ley de Amnistía" sino una burda manera de echar tierra sobre los horrores del pasado? Ya no se trata solo de desacreditar el Informe Final de la Comisión de la Verdad o desacatar abiertamente a la CIDH. Es beber las aguas del Leteo, el río del olvido. A los peruanos les importa poco el futuro de los documentos históricos: la cronología de cómo se fue modificando el himno nacional, la lista de los oficiales que pelearon en la batalla de Ayacucho, una carta manuscrita de don José de San Martín, el testamento de Julio C. Tello y así, un inconmensurable etcétera.

En este país en el que se menosprecia la memoria, mientras menos sepamos del pasado convulso de nuestra historia republicana, mejor para la clase dirigente. Triste que ocurra justo cuando nos disponemos a conmemo-

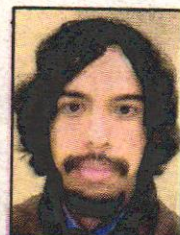
rar el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el último gran enfrentamiento que consolidó la independencia. De un tiempo a esta parte, el Perú se ha convertido en el hazmerreír de la región. El país en el que un dictador condenado por crímenes de lesa humanidad es lanzado a una campaña electoral. Algo imposible, no solo porque está viejo y se supone que se moría, sino porque el indulto espurio de PPK, ratificado por el TC fujimorista y permitido por la señora que duerme en Palacio, no lo exime de ninguna de sus condenas (y de las que vendrán).

Según la influyente "The Economist", somos un país sumido en el desgobierno. Ante la situación macondiana que atraviesa nuestra nación, con una presidenta que carga con medio centenar de muertos, investigaciones por desbalance patrimonial y un diminuto 5% de aprobación, la pregunta salta por sí

sola: "¿Cómo hace para resistir? La respuesta corta es que ella no dirige el país; los que están a cargo son los legisladores", explica el medio británico, para el cual debemos de ser una excentricidad bananera, un inhóspito enclave donde el hampa capturó el poder. Y sigue la nota: "Si ella cae, el Congreso debe convocar elecciones. Pero sus miembros no tienen ningún deseo de acortar su mandato ni los generosos salarios y beneficios que disfrutan". Nunca mejor dicho.

Todo parece indicar que, en unas pocas semanas, la memoria histórica del Perú será trasladada al almacén industrial elegido para ser la sede temporal del Archivo General de la Nación. Ahí correrá el riesgo de deteriorarse por la humedad o por encontrarse en una zona industrial, a pocos metros de un local que almacena envases de plástico y que podría ser escenario de otro de esos incendios a los que estamos acostumbrados a ver en las noticias. ¡Y le va a costar al Estado 12 millones de soles por adjudicación directa! Se podría pensar que la destrucción de la memoria histórica forma parte de algún plan, pero en este caso más oportuna parece la lógica de la navaja de Hanlon: "No es maldad ni está premeditado: es simple estupidez humana". ■

Ser peruano y ser feliz



ROBERTO RAMÍREZ MANCHEGO

Ser peruano y ser feliz es una contradicción. La felicidad no es posible mientras un holograma se proyecta en Palacio de Gobierno y los herederos espirituales de Momón se reparten el país, rabiosa, urgentemente, como hienas con toxoplasmosis. No hay felicidad cuando el orientalismo político que ha germinado en nuestro suelo es la filosofía de la Yakuza y no la escuela de Kioto.

No puede existir felicidad cuando uno toma el desayuno y la televisión nos bombardea con noticieros tanáticos, los amores imposibles del *influencer* de moda o con las sentinas del fútbol peruano. No hay felicidad cuando uno cruza la pista y constata que el peatón vale menos que un automóvil, mientras el tráfico va degradando y destruyendo cualquier amago

de civilidad. La felicidad no es posible cuando los feminicidas caminan impunes, amparados en un sistema de justicia paquidémico y venal. No existe felicidad cuando los futbolistas son héroes de la patria y un profesor es ciudadano de segunda clase.

La felicidad no existe cuando las trapacerías de quienes se reparten el país se repiten -a distinta escala- en los pasillos de cualquier entidad gubernamental; en la oficina privada, en la cola del banco, en el micro y en el mercado. De ahí, la admiración que tantos sienten por los tiempos del "Doc", por la yuca, por la mano dura y por "el orden". Tal vez el sueño de muchos sea un sistema de corrupción organizado, que funcione a punto, como una máquina eficiente de robo y degradación. Al fin y al cabo, ¿qué es la peruanidad, más allá del ceviche, del pollo a la brasa o del fútbol peruano?

Sin embargo, la infelicidad no es solo contemporánea, porque en el Perú el tiempo es cíclico: la peruanidad es un eterno retorno.

¿Se podía ser feliz en los tiempos de la anarquía militar, cuando pequeños reyezuelos de la guerra se repartían el territorio? ¿En la época del guano, cuando se formaron ingentes fortunas, que algunas duran hasta hoy? ¿Con la traición de Prado, que esquilmo, sin asco, las arcas nacionales? ¿Luego de la derrota con Chile? ¿En los tiempos de Leguía, el "roba pero hace obra" del siglo pasado? ¿Con la represión y la corruptela de Odría y Esparza Zañartu? ¿Con las dictaduras militares? ¿Con los dos alanismos, donde la plata llegaba por ensalmo? ¿Con el senderismo criminal y las violaciones a los derechos humanos por miembros de las fuerzas armadas? ¿Con el fujimorismo, que

funciona como una Hidra de Lerna? ¿Con el toledismo, supuestamente redentor, que reprodujo los vicios que dijo combatir? ¿Con el ollantismo entregado a la CONFIEP? ¿Con el ppkausismo lobista y voluble? ¿Con el vizcarrismo sinuoso y caradura? ¿Con el castillismo y el carterismo de poca monta?

Quizás exista una manera de ser peruano y ser feliz, más allá del clásico vals: sería una felicidad a pesar de la peruanidad. No una felicidad amodorrada, ni cándida sino una felicidad crítica, que aguce los sentidos. Porque ser peruano, más que nomenclatura geográfica, es un asunto existencial.

Camus, en "El mito de Sísifo", luego de analizar la condición humana -reflejada en las peripecias de este héroe mitológico-, decía que uno puede imaginarse a Sísifo feliz, aunque tuviera que cargar eternamente una piedra inmensa sobre sus hombros. Para ser peruano y ser feliz habría que seguir ese ejemplo. Eso, claro está, no significa resignación, si es que los sísifos criollos ejercen de manera valiente aquello que los griegos antiguos conocían bien: la parresía. ■

Parresía. - Término que significa básicamente "decirlo todo" sin miedo ni delicadezas. (Nota del director).

¿Venezuela madura?



YBRAHIM LUNA

Este domingo Venezuela decidirá si pone fin al régimen chavista tras 25 años de “revolución” en unas elecciones presidenciales cargadas de zancadillas y amenazas. La noticia del momento es la consolidación del candidato opositor de la PUD (Plataforma Unitaria Democrática), Edmundo González Urrutia, quien, según la mayoría de encuestas, ganaría en primera vuelta. Por su parte, Nicolás Maduro, que ostenta el poder desde 2013, buscará remontar un escenario adverso y reelegirse para el periodo 2025-2031, superando así el tiempo de mandato del mismísimo Hugo Chávez. Un panel de expertos electorales de las Naciones Unidas ya se encuentra en Venezuela y el Centro Carter ha confirmado su participación. Sin embargo, los observadores de la Unión Europea han sido vetados y el grueso de la diáspora venezolana (más de 7 millones) no podrá participar desde el extranjero por los mañosos requisitos administrativos que exige el “sistema electoral”.

El pasado 17 de julio, en un evento de campaña, el presidente Nicolás Maduro declaró que “el destino de Venezuela, en el siglo XXI, depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”.

El sábado 20 de julio, el último día que se pudieron publicar encuestas, *Poder y Estrategia* y *ClearPath* dieron una amplia ventaja al candidato opositor. Según *Poder y Estrategia*, el escenario sería irreversible, situando como ganador a González Urrutia con un 64%, seguido de Maduro con 21% (más de 40 puntos de diferencia). Para *ClearPath*, la ventaja es menor, pero con la misma tendencia: González 59% y Maduro 31%. Tres días antes, la encuestadora UCAB-Delphos daba cifras similares: González 59.1% y Maduro 24.6%; lo mismo *Consultores* 21: González entre el 55% y el 60% y Maduro entre el 25% y 28%. Son pocas las encuestadoras que dan ganador a Maduro, entre ellas *Hinterlaces*, que sitúa primero al actual presidente con un 54.2%, y al candidato de la oposición con un 24.1%; o *Data Viva*, donde Maduro obtiene el 55.2% y González el 20.9%.

Algo que puede definir la elección es la participación ciudadana. Los expertos

han calculado que, si esta supera el 73%, el chavismo tiene todas las de perder. Las encuestas muestran que la confirmación de participación supera el 77%. Curiosamente, solo un 22% opina que las elecciones serán libres y justas.

La exdiputada derechista María Corina Machado, fundadora de “Vente Venezuela”, fue elegida como candidata de la oposición en las primarias del 22 de octubre del año pasado. Sin embargo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, le recordó que estaba vetada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer cualquier cargo público por 15 años por su apoyo a las sanciones que Estados Unidos le impuso a Venezuela y su respaldo a Juan Guaidó como presidente interino. El ré-

gimen chavista aseguró que la inhabilitación de Machado se dio el 30 de junio de 2023, meses antes de las primarias opositoras, por lo que la candidata de 56 años ni siquiera debió presentarse.

Machado, que según algunas encuestas contaba con una intención de voto superior al 50%, aseguró que desconocía la inhabilitación, que no fue notificada y que sin su participación no sería una contienda democrática. En enero de este año, el TSJ confirmó su inhabilitación y luego declaró improcedente su demanda de reconsideración. Machado se amparó en los Acuerdos de Barbados (auspiciados por Noruega) de octubre de 2023, entre el gobierno y la oposición, cuyo objetivo era definir un cronograma electoral, la habilitación de todos los candidatos a la

do más cercano: la filósofa y docente Corina Yoris, de 80 años. Pero la nueva candidata de la PUD también fue excluida por no completar el proceso digital de inscripción. Yoris asegura que el portal web estaba bloqueado. La PUD había inscrito previamente (el 26 de marzo) al exembajador Edmundo González Urrutia como “candidato de tapa” (entiéndase: intercambiable). Quien sí pudo inscribirse de forma independiente y a último minuto fue el político opositor Manuel Rosales, gobernador del Estado de Zulia, por el partido Un Tiempo Nuevo. Rosales declaró entonces que estaba dispuesto a entregar su lugar a cualquier otro candidato de oposición que superara el veto chavista.

Conocido el impedimento de inscripción de Corina Yoris, el gobierno de Gustavo Petro emitió un comunicado desde la cancillería colombiana criticando la medida. Por su parte, Lula da Silva, desde Brasilia, declaró el 28 de marzo que el bloqueo de la candidata Yoris era “grave” y “sin explicación jurídica”. Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, dijo que la situación de Venezuela era lamentable y que “no existe un respeto elemental por la oposición, lo que perturba y crea una situación de que eso (el gobierno de Maduro) no se puede llamar democracia”. El 5 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno venezolano para que asegure la participación política de la oposición.

El 19 de abril la PUD anunció que el candidato de la unidad sería el diplomático de carrera Edmundo González Urrutia, de 74 años, quien contaba con el total apoyo de Corina Machado y del gobernador Manuel Rosales, quien declinó su candidatura para apoyarlo. González Urrutia, gracias a las redes sociales, pasó en unas semanas de ser casi un desco-

nocido a ser identificado por la mayoría de venezolanos.

El presidente Lula da Silva ha instado a su homólogo venezolano a aceptar lo que digan las urnas. Maduro declaró el martes 23 de julio que reconocerá y defenderá los resultados. Para muchos analistas es la primera vez en 25 años que existe la posibilidad real de que el oficialismo pierda la presidencia ante la derecha. De no mediar alguna maniobra de última hora, como que el Tribunal Supremo desconozca la participación de González Urrutia en el tarjetón electoral (son 10 candidatos), la suerte del chavismo estaría echada. Esto no quiere decir que Nicolás Maduro (del PSUV: Partido Socialista Unido de Venezuela), quien aún cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, vaya a entregar el poder fácilmente. Se teme que si ocurre una confrontación civil violenta, la diáspora venezolana en la región aumente. Eso le concierne a los peruanos de un modo cada vez más dramático. ■



Simpatizantes del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia se reúnen en un mitin en La Victoria, Aragua, el pasado 30 de mayo.

presidencia y la liberación de “prisioneros políticos”. A la par, Estados Unidos anunció que aliviaría las sanciones económicas a la industria venezolana cada seis meses. Conocidos los impases electorales con la oposición, Estados Unidos anunció que desde el 18 de abril de este año no renovarían las licencias económicas a Venezuela.

La oposición adujo que el TSJ sí permitió la inscripción de algunos políticos inhabilitados. El oficialismo respondió recordando que Machado fue destituida como diputada en 2014 por “traición a la patria” por haber participado con la delegación panameña para hablar ante la Asamblea General de la ONU, e inhabilitada por un año en 2015 por omitir ingresos en una declaración jurada. Varios colaboradores de Machado han sido detenidos acusados de participar en una conspiración para asesinar al presidente Maduro.

Ante la impuesta imposibilidad de postular, Machado recurrió a su respal-

SEGÚN PODER Y ESTRATEGIA, EL ESCENARIO SERÍA IRREVERSIBLE, SITUANDO COMO GANADOR A GONZÁLEZ URRUTIA CON UN 64%

La mafia en el Estado



RONALD GAMARRA

En el Estado peruano mandan a sus anchas los malandros y los réditos privados. El bien público, los intereses de la gente, los derechos del pueblo a los servicios fundamentales, el respeto a la dignidad humana, ya no entran en modo alguno en la ecuación cuando se trata de decidir sobre el gasto público, es decir, sobre la distribución y ejecución del presupuesto del Estado. Porque, efectivamente, el desembolso público se ha convertido en una feria de la repartija, en la cual cada podre, cada mafia, cada sinvergüenza, trata de obtener en primer y exclusivo lugar "lo suyo", su "mordida", su parte del botín.

El perjudicado es el peruano que lucha cada día, y sobre todo los más vulnerables; todos los compatriotas que tenemos la desventura de sufrir los latrocinios del gobierno y el congreso, que son los que aprueban el presupuesto trozándolo como buitres, y de los funcionarios nacionales, regionales y locales que lo ejecutan. La corrupción campea entre todos ellos, junto con un absoluto desprecio por la gente, que en la mentalidad de ellos no merece servicios ni obras de calidad, que sirvan de manera efectiva para solucionar problemas, ayudar a los más vulnerables, facilitar el progreso de los trabajadores y emprendedores, mejorar la salud, la educación y todo aquello que pueda abrir una perspectiva de buen futuro.

Todos podemos comprobarlo a simple vista, dándonos una vuelta por la ciudad que habitamos. Pistas "reparadas" que no duran lo mínimo, puentes que se caen (perdón, se desploman) dos o tres años después de haber sido inaugurados con bombos y platillos, escuelas

construidas a mínimo costo, sin servicios higiénicos, que ya tienen los muros y hasta las columnas cuarteadas, colas de adultos bastante mayores en la madrugada para obtener una cita incierta en la salud pública, veredas rotas una y otra vez por ausencia total de coordinación, absoluto desinterés en la vivienda popular, transporte público como latas de sardinas, obras abandonadas por años a la intemperie... la lista es interminable.

Y lo también escandaloso es que tras cada contrato del Estado casi siempre

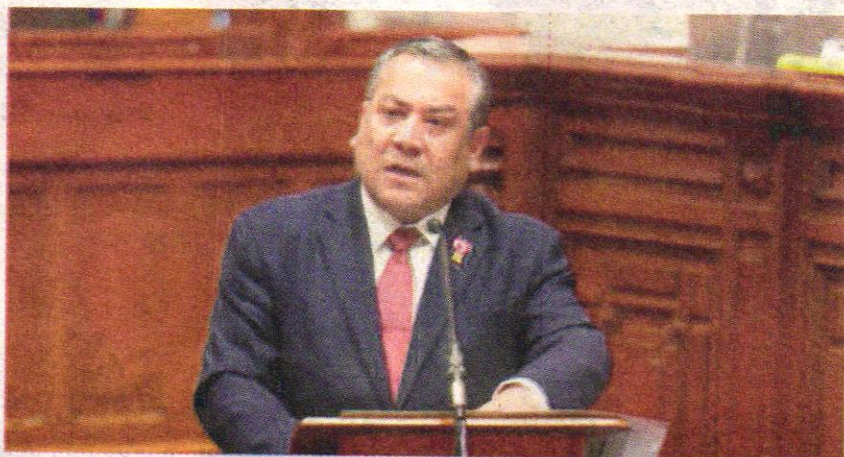
abandonada indefinidamente. El Estado peruano bate récords en obras echadas al olvido por las cuales nadie asume nunca la menor responsabilidad.

De allí vemos la profunda y gravísima relación entre el bienestar y la política. Si uno no se ocupa de la política y no hace sentir su voz de protesta ante los abusos de las autoridades chorizas, será su víctima. Esa es la verdad. La calidad de los servicios públicos guarda relación íntima con la capacidad de la gente común y corriente para hacerse respetar, deman-

público, por lo que nos afecta a todos, por aquello que por algo denominamos bien común, que a fin de cuentas es el bien de la colectividad, el bien de la patria. Debemos estar informados y actuar de muy diversas formas, pero siempre convergiendo, uniéndonos, a través de iniciativas ciudadanas, comités o movimientos congregados para fines precisos de defensa de nuestros derechos. Y si se trata de entrar en política seria, decente, para postular a cargos públicos, pues hacerlo con el compromiso y honestidad que hoy brillan por su ausencia en la política nacional. Pero por ahora no hablo de ello, sino de algo más básico y vinculado a la simple condición de cualquier ciudadano.

En el Perú de los años recientes, las cosas se han complicado gravemente debido a que el Estado ha sido tomado por asalto por los intereses mafiosos de grupos económicos ilegales que han hallado en ciertos partidos los instrumentos idóneos para hacer de las suyas y beneficiarse a bolsillos llenos, mientras perjudican el presente y sobre todo el futuro de los peruanos.

Pensemos solamente en la educación, donde la alianza del fujimorismo con la bancada magisterial (representante de la FENATE, sindicato trufado de senderistas) ha logrado aprobar una ley que permitirá el nombramiento automático de decenas de miles de maestros que no han aprobado el examen de aptitudes mínimas para serlo. Qué les importa la educación po-brísima, misérrima, que recibirán los niños de las escuelas estatales, a ellos solo les importa su conveniencia electoral. Lo mismo ocurre con la salud, donde el ministro, vasallo de César Acuña, se propone suspender el examen nacional de medicina, que pone una barrera al ingreso de "médicos" ineptos al servicio público, solo para facilitar la entrada de los médicos egresados de la universidad de su jefe político, la César Vallejo (qué agravio al poeta), que fracasan en ese examen en un 75%. Pero a esos ministros de salud y educación, a su gobierno y a su congreso ¡qué les importa la salud y la educación del pueblo y su niñez!



Gustavo Adrianzen, dizque presidente del Consejo de Ministros.

encontramos una empresa ejecutora improvisada, con frecuencia creada poco antes de la licitación, sin ninguna experiencia en la tarea o servicio que se le encarga. Se trata de compañías obviamente fraudulentas, tras las cuales están los inspiradores de la "obra pública" a la expectativa de embolsarse el dinero público, cuanto antes mejor. Y qué demonios importa si después el producto no cumple en absoluto con lo que se ofreció, si empieza a caerse a pedazos desde que se inaugura o se "desploma" en tiempo récord, o si queda

dar sus derechos y, sobre todo, exigir responsabilidad efectiva. El apoliticismo juega a favor de la negligencia, la desidia, la corrupción, el caos administrativo, la indiferencia y el desprecio hacia el pueblo. La persona que se estima debe exigir la consideración que se merece.

Y al criticar el apoliticismo no me refiero a que usted deba inscribirse en uno de esos partidos ridículos que en realidad son ahora negocios privados donde se compran y se venden candidaturas y puestos públicos. No, todo lo contrario. Aludo al interés activo por lo

Verbos duros de roer

Algunos verbos del español son poco usados en ciertos modos y tiempos; en consecuencia, los hablantes dudan en el momento de conjugarlos. ¿Cómo se conjuga, por ejemplo, «roer» en la primera persona, en singular, del presente del indicativo? ¿«Yo roo el hueso hasta dejarlo limpio» o «Yo royo el hueso hasta dejarlo limpio»? Ambas formas son correctas y existe, incluso, una tercera

opción: «Yo roigo el hueso hasta dejarlo limpio».

El verbo que nos ocupa puede conjugarse también de tres maneras distintas en todas las personas del presente del subjuntivo, en singular: «Es probable que yo roa (roya o roiga) el hueso hasta el

tuétano»; «Quizá tú roas (royas o roigas) el hueso hasta dejarlo blanco»; «Que ellos roan (royan o roigan) los huesos evidencia que les gustó la comida». Por lo visto, «roer» es un verbo bastante duro de roer.

Resulta, asimismo, difícil la conjugación del verbo «caber». ¿Se dice «Mi

ropa no cabe en esta maleta» o «Mi ropa no quepa en esta maleta»? Aquí la única oración correcta es la primera. ¿Y cuál es la forma válida entre «No cabo en este minúsculo auto» y «No quepo en este minúsculo auto»? En este caso, debe utilizarse, sin dudar, la segunda.

En cuanto al subjuntivo, diremos que todas las conjugaciones son irregulares. Veamos algunos ejemplos: «Si acomodas bien las cosas, es probable que todo quepa en la mochila»; «¡Quiera Dios que quepamos en este ascensor!»; «Dudo que ustedes quepan en aquel compartimento»; «Procuraremos que vosotros quepáis en la misma cabina».



RICARDO VERA LEYVA

Las autoridades sanitarias palestinas han documentado la existencia de al menos 12 fosas comunes en Gaza. En todas ellas se hallaron cadáveres de civiles con signos de tortura, maniatados y con disparos que concuerdan con ejecuciones extrajudiciales. "Es urgente que se haga una investigación internacional e independiente", pidió el médico y director de las Fuerzas Civiles de Defensa de Khan Younis, Yamen Abu Sulaiman, durante una conferencia de prensa el 25 de abril. Han pasado 102 días sin que ninguna institución internacional se haya pronunciado.

Hasta ahora se han recuperado de las fosas 743 cuerpos. Las autoridades palestinas responsabilizan al Ejército israelí de la ejecución y enterramiento de mujeres, niños, enfermos hospitalizados, personal médico y periodistas.

"Es el deber del secretario general de las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales crear un comité de investigación. Estamos dispuestos a colaborar como sea necesario (...). Es además urgente que se le permita el ingreso a una unidad forense independiente, sobre todo teniendo en cuenta que todas nuestras facilidades médicas han sido destruidas", señaló Sulaiman durante aquella conferencia.

La respuesta de la comunidad internacional fue rápida. En menos de 24 horas un vocero de la ONU manifestó la necesidad de una "investigación clara y creíble". Estados Unidos alegó que cualquier indagación debería ser "exhaustiva y transparente" y la Unión Europea dijo que, efectivamente, las fosas comunes en los hospitales "dan la impresión de que podría haber habido violaciones de los derechos humanos internacionales". Pero ninguno de los organismos hizo oficial una investigación de lo ocurrido.

Las fosas más grandes fueron halladas en los patios del hospital Al-Shifa, en la Ciudad de Gaza, y en el hospital Nasser, en Khan Younis.

El hospital Al-Shifa, construido en 1948, fue el centro administrativo del Ministe-

El criminal de guerra Benjamín Netanyahu aplaudido en el Congreso de los Estados Unidos.

Fosas comunes

► Como en los peores escenarios del holocausto perpetrado por los nazis, doce megatumbas con cadáveres que testimonian torturas y ejecuciones son halladas en Gaza



rio de Salud hasta el pasado 15 de noviembre, cuando el ejército israelí lo atacó por primera vez.

Durante aquella primera incursión a sus instalaciones los israelíes torturaron y asesinaron a pacientes, personal médico y civiles, destruyeron los generadores eléctricos y cortaron el suministro de agua. Cuando el ejército de Netanyahu se retiró nueve días más tarde, el hospital, debido al grado de destrucción, sólo podía brindar primeros auxilios.

El patio se transformó en un cementerio improvisado, donde los familiares de las víctimas de ese primer asedio enterraron a sus seres queridos. Con el paso de los días los edificios del complejo hospitalario se convirtieron

en el refugio de cientos de familias gazatíes.

Cuando el 18 de marzo el ejército de Israel volvió a tomar el hospital, más de 30,000 palestinos se refugiaban en sus instalaciones. La embestida militar duró dos semanas y lo dejó fuera de servicio.

Durante los últimos días del asedio los soldados destruyeron el patio del hospital con bulldóceres, removiendo la tierra donde estaba el cementerio improvisado. Cientos de cuerpos en descomposición quedaron al aire. Y allí mismo los soldados israelíes empezaron a ejecutar a decenas de detenidos. La escena la describió así una madre gazatí al medio de comunicación qatari Al Jazeera:

"Mataron a los hombres

frente nuestro. Luego cavaron huecos en el suelo y los enterraron dentro de cinco en cinco (...). Cuando nos dejaron escapar, nos hicieron caminar por el patio, entre los cuerpos. El lodo nos llegaba hasta las rodillas. Mi niña es pequeña y no podía caminar, pero cuando intentaba ayudarla los soldados me amenazaban".

El lunes 2 de abril, tras la retirada del ejército del hospital Al-Shifa, el personal médico y los voluntarios de las Fuerzas Civiles excavaron las primeras dos fosas comunes. La tercera la encontraron el 7 de abril. Y siguieron hallando fosas con cuerpos las semanas que siguieron. En total, desenterraron 201 cuerpos.

"Hay informes de que algunas de estas personas

tenían las manos atadas", señaló la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, a finales de abril. "Y podría haber muchas más víctimas -reconoció la funcionaria- a pesar de que las Fuerzas de Defensa de Israel alegan haber matado a sólo 200 palestinos durante la operación".

Las autoridades del Ministerio de Salud de Gaza denunciaron que hallaron personal médico y periodistas con los ojos vendados y las extremidades -pies y manos- amarradas. También había niños, ancianos y pacientes enterrados con los catéteres y puertos intravenosos todavía en el cuerpo.

El sábado 20 de abril,



El lunes 2 de abril, tras la retirada del ejército del hospital Al-Shifa, personal médico y voluntarios de las Fuerzas Civiles excavaron las primeras dos fosas comunes. La tercera la encontraron el 7 de abril. Y siguieron hallando fosas las semanas que siguieron. En total, desenterraron 201 cuerpos.



El sábado 20 de abril, cuando el ejército israelí se retiró del hospital Nasser en Khan Younis, los equipos de rescate encontraron tres fosas comunes en las instalaciones y recuperaron 392 cadáveres. Los cuerpos estaban a tres metros de profundidad, tapados con una mezcla de arena, basura y otros residuos.

cuando el ejército israelí se retiró del hospital Nasser en Khan Younis, habían pasado tres meses desde que tomaran las instalaciones. Los equipos de rescate encontraron tres fosas comunes en sus instalaciones y recuperaron 392 cadáveres. Los cuerpos estaban a tres

metros de profundidad, tapados con una mezcla de arena, basura y otros residuos.

“Encontramos cadáveres sin cabeza, cuerpos sin piel y a algunos les habían robado los órganos”, denunció un funcionario local en un comunicado compartido por Quds News Network.

Durante la conferencia de prensa del 25 de abril Abu Sulaiman informó que también encontraron cuerpos en bolsas de plástico con inscripciones en hebreo. “Por lo menos 20 víctimas parecen haber sido enterradas vivas”, explicó. Otras, aparentemente, murieron aplastadas por

los bulldóceres israelíes.

De las 392 víctimas halladas en el hospital de Khan Younis, sólo 62 pudieron ser identificadas. El resto —explicó Sulaiman— “están demasiado descompuestas o mutiladas para poder ser identificadas”. Someter los restos a pruebas de ADN

por ahora es impensable. Las autoridades calculan que hay otros 400 bajo tierra.

El mismo patrón se denunció en las fosas comunes descubiertas en el campo de refugiados de Jabalia, donde se encontró 120 cuerpos el 31 de mayo, y en la fosa común del colegio Hamad, en el norte de la región, donde se desenterraron otros 30 cadáveres.

En un comunicado de prensa, difundido por la Oficina Coordinadora de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas el lunes 8 de junio, la ONG británica *Medical Aid for Palestine* denunció la falta de respuesta de la comunidad internacional. Y subrayó que las fosas comunes “requieren una investigación y documentación forenses urgentes”, para poder “preservar las pruebas y exigir responsabilidades allí donde se identifiquen irregularidades”.

Como explicó el científico forense de la Universidad Internacional de Florida Stefan Schmitt, al medio *Al Jazeera*, la investigación de fosas comunes es usualmente un proceso muy complejo, costoso y difícil. “La primera reacción de la gente es, obviamente, desenterrar los cuerpos. Pero para poder identificarlos y saber con seguridad qué pasó se necesitaría dejar los cuerpos bajo tierra”, dijo Schmitt en el artículo publicado el 11 de mayo. “Lamentablemente se está destruyendo mucha de la evidencia”, termina Schmitt.

Pero como aclara el abogado británico Geoffrey Nice, quien encabezó el caso de la Corte Internacional de Justicia contra el político serbio Slobodan Milosevic, hay todavía esperanza para la justicia. “El no poder recuperar toda la evidencia no implica que lo que sí se pudo encontrar sea insuficiente”, dijo a *Al Jazeera*. En Yugoslavia algunas fosas comunes pudieron ser estudiadas después de décadas.

El ejército de Israel, al día de hoy, niega haber excavado o utilizado fosas comunes en Gaza. Este miércoles 24 de julio el Congreso estadounidense recibió a Benjamín Netanyahu en Washington. Los diputados aplaudieron cuando el primer ministro llamó a los palestinos “salvajes” y vitorearon cuando anunció que la matanza continuará. ■

Indecopi se ha convertido en el compinche perfecto de las inmobiliarias para burlar las ordenanzas municipales. La argucia legal utilizada es la eliminación de presuntas "barreras burocráticas".

El pasado 12 de junio la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi dispuso que las municipalidades emitan "la conformidad de obra" a las inmobiliarias, aun cuando las empresas no hayan cumplido con reparar los daños que hayan ocasionado en el vecindario durante las obras.

El documento fue reafirmado por el presidente de la Sala, Orlando Vignolo Cueva, un abogado con maestría en puertas giratorias. Vignolo es socio del bufete Vignolo & Reyes Arrese, especializado en el servicio de "representación y patrocinio en procedimientos administrativos ante órganos resolutores del Indecopi", dice la web.

El fallo del Indecopi empezó a gestarse el año pasado, cuando algunos vecinos del distrito de Jesús María se enfrentaron al grupo inmobiliario Edifikarte. Según los documentos del caso, estas personas acusaron a la empresa de "daños materiales causados a sus propiedades por la ejecución de una obra" en la calle Huáscar. "Todo empezó por una señora a la que le hicimos reparaciones, pero luego demandó más de lo que nos correspondía", señala Luis Nita Cáceres, gerente general de la empresa.

Otro de los denunciantes fue Segundo Saldaña. "Tengo un departamento en Huáscar desde el 2007. El año pasado, cuando la inmobiliaria hizo los movimientos de tierra, generó rajaduras en mis techos, lo que se tradujo en filtraciones", cuenta.

En mayo del 2023, cuando Edifikarte solicitó la conformidad de obra del edificio de diez pisos, el municipio respondió que primero reparara los daños que había ocasionado en los inmuebles colindantes.

Edifikarte recurrió entonces a la Comisión de



El edificio de siete pisos que la inmobiliaria Arquitectura y Diseño SAC está levantando en Surco. La municipalidad suspendió la obra debido a que la zona solo permite edificaciones de hasta cuatro pisos, pero Indecopi ordenó reactivar los trabajos.



El monstruoso conglomerado TyC está levantando un edificio en la cuadra 11 de la avenida El Ejército. La obra se está ejecutando gracias a que el Indecopi le sacó de encima cualquier intento de fiscalización.



La empresa VyV consiguió que el Indecopi anule la paralización de obra que la Municipalidad de Miraflores había ordenado para el caso del edificio situado en la avenida Roosevelt.



Cerca de 50 vecinos denuncian que la empresa Lynx ha generado grietas y daños a su edificio por construir una mole de 17 pisos a su costado.

Conformidad de Indecopi

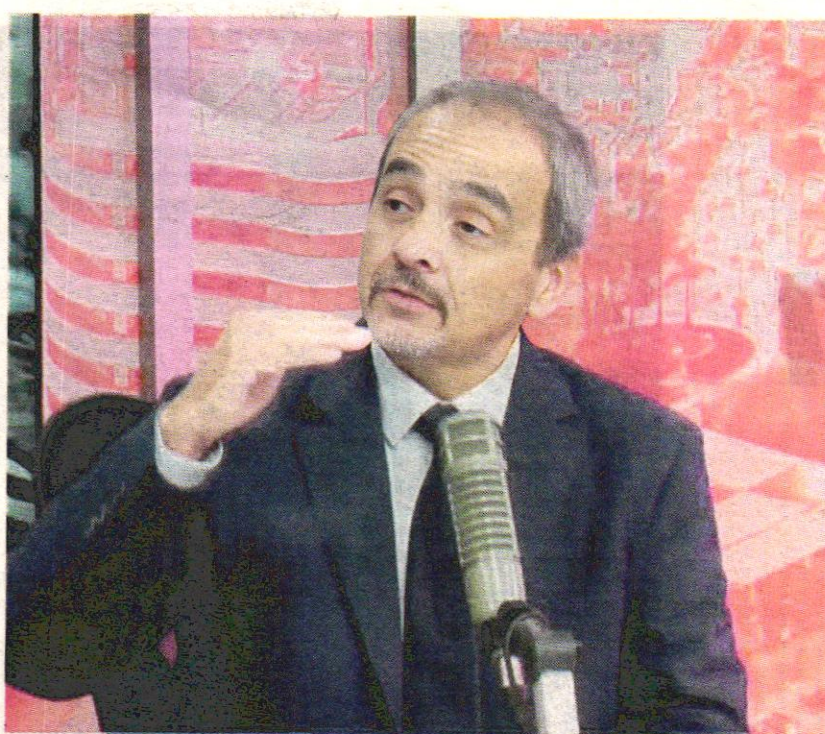
► La plata y la influencia del corrupto Club de la Construcción han llegado al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia. Quienes pagan el pato son los municipios y el derecho de los vecinos

Eliminación de Barreras Burocráticas. Argumentó que reparar los daños de inmuebles no era requisito para obtener el visto bueno municipal, según la Ley de Edificaciones. Y acusó al equipo técnico del municipio de Jesús María de atentar "contra la libre iniciativa privada".

La empresa alegó que ya había reparado los daños en el edificio afectado. El municipio respondió que quedaban daños por subsanar. "El caso del señor Sal-



El abogado Orlando Vignolo preside actualmente la Sala Especializada en la Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. ¡La puerta giratoria!



"En el Indecopi las empresas han obtenido fallos favorables para el tema de barreras burocráticas en apenas un mes", dice Lino de la Barrera, abogado de la Municipalidad de Miraflores.

PERU		Presidencia del Consejo de Ministros	INDECOPI	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas RESOLUCIÓN 0460-2024/SEL-INDECOPI EXPEDIENTE 000130-2023/CEB
PROCEDENCIA	COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS			
DENUNCIANTE	DESARROLLADORA INMOBILIARIA EDIFIKARTE S.A.C.			
DENUNCIADA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA			
MATERIA	LEGALIDAD			
ACTIVIDAD	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS			
SUMILLA: se CONFIRMA la Resolución 0963-2023/CEB-INDECOPI del 3 de noviembre de 2023, que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de reparar cualquier tipo de deterioro en la propiedad privada que se hubiere producido como consecuencia de la construcción, para obtener el Certificado de conformidad de obra y declaratoria de edificación con variación - modalidad C, materializada en la primera disposición final y transitoria de la Ordenanza 253-MDJM, Ordenanza que regula la ocupación de la vía pública con materiales de construcción y/o desmonte; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Desarrolladora Inmobiliaria Edifikarte S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Jesús María.				
El fundamento es que las entidades denunciadas, excedieron sus competencias al establecer la regulación, debido a que en el ordenamiento jurídico no existe una norma vigente que contemple la obligatoriedad de reparar cualquier tipo de deterioro en la propiedad privada que se hubiere producido como consecuencia de la construcción para la obtención del Certificado de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, por lo que vulneran el artículo VIII del Título Preliminar y el artículo 78 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los artículos 2 y 40 del Texto Único Ordenado de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el literal a) del numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado por Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA.				
Cabe precisar que el presente pronunciamiento no exonera a los agentes económicos del sector inmobiliario de la obligación de reparar los daños causados a la propiedad privada, únicamente, no se les exigirá dicha reparación como condición para obtener el certificado. Esta decisión no desconoce el derecho de los vecinos afectados por la construcción de solicitar la reparación mediante los procedimientos legales pertinentes. Además, se reconoce la autoridad de la Municipalidad Distrital de Jesús María para llevar a cabo sus funciones de fiscalización y control posterior en estos casos.				
Identificada con RUC 20004829912.				
1/13				
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Tel: 224 7800 e-mail: consultari@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe				

En junio pasado el Indecopi confirmó el fallo a favor de las inmobiliarias. El Certificado de Conformidad de Obra se entrega automáticamente. Plata como cancha.

daña fue que presentaba rajaduras preexistentes en su techo y era un tema menor. A nosotros no nos correspondía intervenir", dicen desde la constructora.

Y aunque la Municipalidad de Jesús María le otorgó a Edifikarte la conformidad de obra apenas se enteró de la denuncia enviada al Indecopi, el ente

regulador siguió con el proceso y emitió un fallo que genera jurisprudencia a favor de las inmobiliarias.

El pasado 3 de noviembre la primera instancia, al mando del abogado Vladimir Solís Salazar, le dio la razón a la empresa. "Corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de reparar cualquier tipo de deterioro

en la propiedad privada que se hubiera producido como consecuencia de la construcción, para obtener la conformidad de obra", se señala en la resolución.

La comisión Solís fue más allá y ordenó que su decisión se aplicara "con carácter general en favor de otros agentes económicos o administrados que también se vean afectados".

La Municipalidad de Jesús María apeló la decisión, pero en junio de este año la Sala de Orlando Vignolo ratificó el fallo. Ningún funcionario del municipio aceptó conversar con nosotros. Quien sí se animó a declarar fue Lino de la Barrera, asesor jurídico de la Municipalidad de Miraflores, otro de los distritos afectados por la embestida de las constructoras.

"Indecopi ha abierto la puerta para que las inmobiliarias pasen por encima de los municipios. Los que van a terminar pagando las consecuencias son los predios colindantes dañados o la propia gente que compre esas edificaciones", advierte De la Barrera.

El pánico ya comenzó a cundir. En Jesús María un grupo de 50 vecinos de la avenida Tizón y Bueno teme que la constructora Lynx use el fallo del Indecopi a su favor para no reparar los daños que causó la construcción de un edificio de 17 pisos.

"Las grietas en nuestro edificio surgieron en la etapa de la demolición y luego en la excavación de esa obra. Ahí es donde comienzan a aparecer las rajaduras en los espacios comunes y al interior de algunos departamentos", dice Godofredo Bernaola, presidente de la junta vecinal del edificio afectado.

Bernaola asegura que la empresa se comprometió a hacer las reparaciones. "Pero nos mienten a cada momento, nos han dado un cronograma para las reparaciones, pero no lo han cumplido. Ya va más de un año de eso. Se olvidarán cuando termine la obra", dice.

Paulo Higuera, gerente general de Lynx, señaló a este semanario que están

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30



La mole que la inmobiliaria Edifikarte levantó en la calle Huáscar, en Jesús María. Por este caso el Indecopi ha dispuesto que importa poco si una obra de construcción daña predios contiguos.

Se pinta solo

► Alejandro Soto bate marcas nacionales enjuiciando a periodistas paisanos. Dice que "perjudican su proyecto de vida"

SHANNA TACO

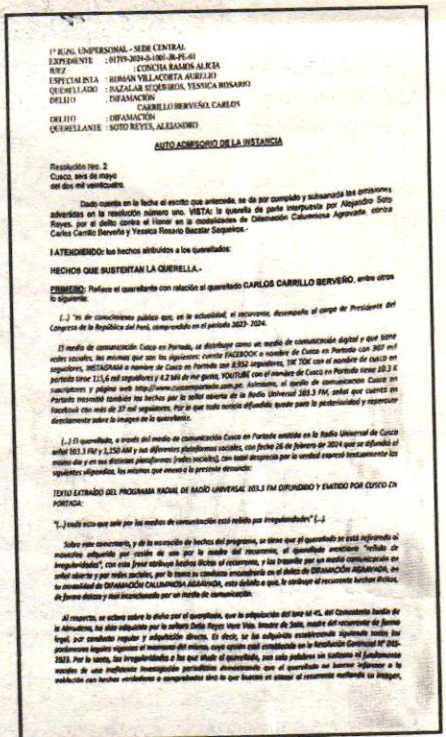
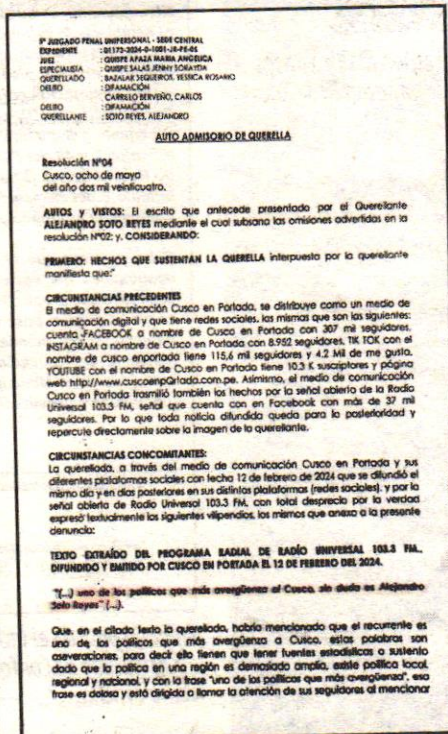
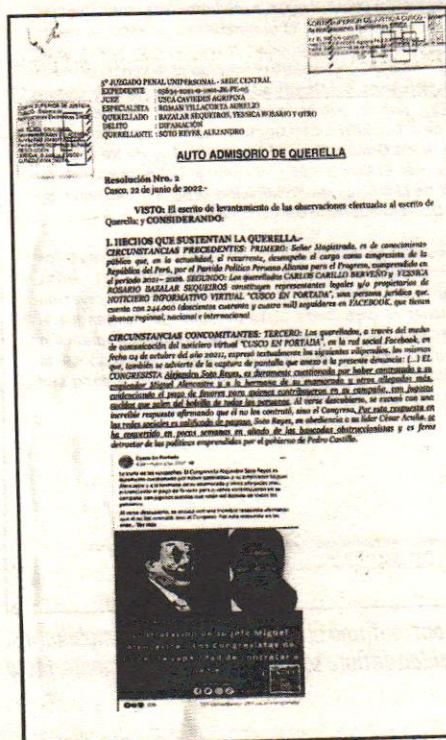
Alejandro Soto, el presidente del Congreso hasta el cierre de esta nota, hará historia. Es el político cusqueño que más periodistas ha querellado. La última demanda contra la periodista Yessica Bazalar fue porque ella dijo que Soto era "uno de los políticos que más avergüenza al Cusco". La lista negra incluye a otros cinco periodistas de su región.

El presidente del Congreso comenzó su arremetida legal contra la prensa en septiembre del 2021, cuando "La República" reveló que había contratado a su cuñada en su despacho. Los periodistas Yessica Bazalar y Carlos Carrillo comentaron el destape en el medio radial "Cusco en Portada".

Esto provocó la ira del parlamentario, quien negó tener relación alguna con la hermana de su trabajadora y demandó a Bazalar por difamación. Tiempo después el programa "Cuarto Poder" confirmó que el romance sí existía. "Recientemente ha tenido un hijo con la mujer que negó. ¿Qué va a decir durante el juicio oral de la querrela? ¿Va a decir que inventamos esa relación?", dice Bazalar, que enfrenta otras dos querrelas de Soto.

El 12 de febrero pasado los

Alejandro Soto Reyes. Su lista negra incluye a seis periodistas y una docena de denuncias.



Resoluciones que admitieron a trámite las tres querrelas contra Yessica Bazalar y Carlos Carrillo, periodistas del medio "Cusco en Portada".

periodistas Yessica Bazalar y Carlos Carrillo comentaron la noticia del momento: la inclusión de Alejandro Soto en la presunta red criminal liderada por Patricia Benavides. La investigación fiscal atribuyó al congresista la presunta negociación de votos para remover a los integrantes de la Junta

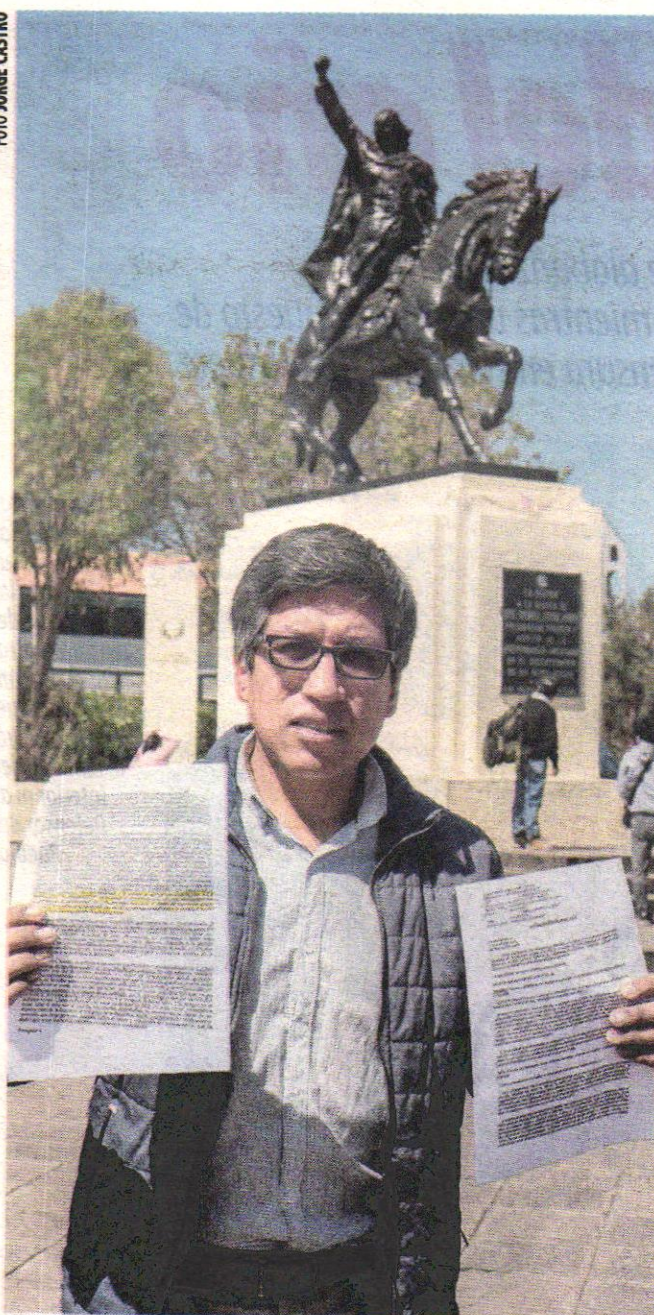
Nacional de Justicia. Fue entonces que Bazalar señaló que Soto era uno de los peores políticos cusqueños. "Él está implicado en la organización criminal de Patricia Benavides [...] Soto ha sido involucrado nuevamente, una vez más, en una trama potencialmente ilícita [...] uno de los

políticos que más avergüenza al Cusco, sin duda, es Alejandro Soto", dijo Bazalar. Al presidente del Congreso no le cayó nada bien el comentario y denunció a la periodista ante el Quinto Juzgado Unipersonal del Cusco, a cargo de Jenny Quispe Salas. Soto también implicó en la demanda al

periodista Carlos Carrillo. "Intentó incluirme solo por haber estado sentado al lado de Yessica en la mesa de conducción. ¡Increíble!", dice el locutor. El argumento del parlamentario apegista fue que ambos le habían causado daño psicológico y habían perjudicado su



Yessica Bazalar tiene tres querellas encima: "Nos responsabiliza de las desgracias de su gestión, cuando él y el Congreso se ganaron la desaprobación por hacer leyes para los criminales".



Carlos Carrillo, periodista dos veces querellado: "[Soto] intentó incluirme [en una demanda] solo por haber estado sentado al lado de Yessica en la mesa de conducción. ¡Increíble!".

"proyecto de vida". "El proyecto de vida —explica Soto en uno de los párrafos de la demanda— es aquel daño de magnitud que trunca el destino de la persona, que le hace perder el sentido mismo de su existencia". No sólo es querellante sino huchafo.

La jueza Quispe Salas admitió la querella contra Yessica Bazalar y apartó a Carrillo. Aun para ella, era demasiado.

"Si el señor ha perdido el sentido de su existencia, ¿cómo está liderando un poder del Estado?, hay que pedirle un examen psicológico", insiste Bazalar.

Dos semanas después, Bazalar volvió a comentar otro destape de un dominical, cuando rebotaron un reportaje de Latina sobre la adquisición de un mausoleo que hizo la familia Soto en un camposanto del Cusco. Lo llamativo era el precio de ganga que, según decía el reportaje de Latina, se debía a la influencia de Soto.

Durante su programa Bazalar dijo que "Alejandro Soto no solo está siendo noticia porque hoy es el títere perfecto junto con Dina Boluarte para estas mafias miserables (...) Hasta su mausoleo lo hace de manera ilegal". Y su compañero, Carlos Carrillo, preguntó: "¿Realmente no hay actos que puedan ser correctos en este señor?".

Pocos días después los periodistas fueron notificados de una tercera querella del presidente del Congreso.

"Soto no denunció al dominical que destapó la historia sino a nosotros por retransmitir el reportaje. Nos responsabiliza de las desgracias de su gestión, cuando él y el Congreso se ganaron la desaprobación por hacer leyes para los criminales", dice Bazalar.

Carlos Carrillo asegura que Soto los ha agarrado de punto. "Nosotros desmentíamos la información que difundía el congresista en su época de locutor. Él fue denunciado y

perdió una querella", asegura Carrillo.

El periodista cusqueño recuerda que la Corte Superior del Cusco condenó a Soto a un año de prisión suspendida por calumnia agravada en el 2012. El periodista refiere que Soto, en el programa que conducía en una televisión local, culpó gratuitamente al comandante PNP Nilo Chávez Luna de la muerte de una persona.

Roberto Pereira, abogado especialista en temas de prensa y libertad de expresión, cuestiona las demandas.

"Primero, Soto no presenta las denuncias contra los medios en los que se origina la información y, segundo, no tolera las opiniones. Las opiniones críticas, mordaces e incluso desagradables no alcanzan para ser consideradas un delito como pretende el señor Soto", dice Pereira.

Para el especialista se trata de un abuso del sistema judicial. "En lugar de responder las

críticas y los reportajes, lo que hace es callar y contestar con denuncias penales antidemocráticas", señala Pereira.

Soto ha empapelado a otros cuatro periodistas: Ronal Calvo, Miguel de la Cruz, Víctor Gutiérrez y Karerina Bayona.

Calvo y De la Cruz, periodistas del diario "El Tiempo de Cusco", tienen cinco querellas en marcha.

El 3 de abril del 2023 el periódico cusqueño difundió una nota sobre una presunta estafa que persigue a Alejandro Soto. De acuerdo con la investigación fiscal, vendió una propiedad a 265 mil dólares cuando el terreno había sido adquirido meses antes por 5 mil dólares. La empresa compradora lo denunció. El diario cusqueño publicó una nota titulada "Alejandro Soto es acusado de estafador". Soto contraatacó denunciando a los periodistas.

El 27 de febrero del 2023 el periódico publicó en portada un encabezado que

mereció otro enojo del presidente del Congreso. Puso la foto de cinco congresistas, entre ellos Soto, con el titular: "¡No nos representan!". En el reportaje el periodista Miguel de la Cruz citaba a Soto, quien se había quejado por ganar "apenas S/ 10,200" y estar afectado por la crisis económica.

"Se queja de su sueldo de congresista, pero gusta de andar con alhajas de oro", señalaba la nota. El periodista y el diario se ganaron otra denuncia por difamación agravada.

Soto también se querelló contra el periodista cusqueño Víctor Gutiérrez, del canal CTC, por burlarse de los lamentos salariales del padre de la patria. "El congresista se queja por el sueldo pero seguro que está cenando en el Manyu Kit Young", dijo Gutiérrez.

El argumento de la querella contra Gutiérrez dice que el comentario del periodista causó un "detrimento en el honor" y la "buena reputación" de Soto. El presidente del Congreso arguye que el restaurante no existe y que el periodista falseó información. La jueza que admitió la denuncia a trámite es Rina Cabana Heredia.

"El congresista utiliza las querellas como una mordaza. Es bastante conocido que Soto quiere ser gobernador regional del Cusco. Él quiere silenciar, que ya no se hable de él en el lugar donde tiene un interés político futuro", dice Edward Martínez, abogado del periodista Víctor Gutiérrez.

"Es la primera vez en la historia del Cusco que un funcionario público querella a tantas personas —asegura Martínez— y te lo digo con conocimiento de causa".

"Los jueces que admitieron estas demandas han infringido el artículo del código procesal que los obliga a hacer una calificación adecuada. Lo que quiere lograr Soto es un efecto disuasorio, un efecto de autocensura. El Poder Judicial no puede ser cómplice de esto", concluye el especialista Roberto Pereira.

"No voy a emitir ningún pronunciamiento porque los procesos se encuentran en el Poder Judicial", dijo Soto al ser contactado por esta publicación. La suma de las reparaciones civiles de todas las querellas supera el millón de soles. Soto aplica tarifa plana en la reparación civil: pide siempre S/ 100,000. ■

Sobón del año

► El ministro de Educación reparte alabanzas de modo equitativo entre Boluarte y Acuña mientras usa el presupuesto de su sector para que la moción de censura en su contra no prospere

SONIA SUYÓN

Un portazo en la cara se llevaron los asesores del ministro Morgan Quero cuando la congresista Norma Yarrow les dijo que no estaba dispuesta a retirar su firma de la moción de censura que se estaba presentando en contra del titular de Educación. La solicitud ya había sido alcanzada a la Oficialía Mayor del Parlamento y contaba con el respaldo y la firma de 33 congresistas. Los diligentes emisarios de Quero sufrieron otro rechazo cuando la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, del mismo modo, se negó a darle una mano al escudero de Dina Boluarte.

Nada de retirar las firmas, les respondieron.

“Llegaron a mi oficina los coordinadores parlamentarios del ministro Quero para pedirme que si yo podía retirar la firma y les dije que no. Yo no soy cogobierno, no le debo ningún favor a este gobierno y voy a fiscalizar la gestión de Dina Boluarte y sus ministros hasta el último día de mis funciones”, dice Norma Yarrow, congresista de Renovación Popular y a quien precisamente tanto Fuerza Popular como Alianza para el Progreso, la coalición de facto que gobierna al país, le bajaron el dedo como candidata para presidir la mesa directiva.

El pedido de censura contra Quero no se podrá ver hasta que no se instale nuevamente el pleno. Sin embargo, algunos congresistas que habían apoyado la moción se han desembarcado a última hora y han pedido el retiro de sus firmas. A decir de la congresista Ruth Luque, la promotora de la iniciativa de destituir al ministro de Educación, se trata de un trueque prebendario: desde el Ministerio de Educación les ofrecen a ciertos congresistas apoyar sus proyectos de ley a cam-



FOTO CÉSAR ZAMALLOA

Congresista Norma Yarrow: se negó a retirar su firma del pedido de moción de censura contra Quero cuando los asesores del ministro de Educación se lo pidieron.

bio de restar las firmas contra el ministro. Hoy se corre el riesgo de que esta moción de censura no prospere. Hasta ahora son dos los congresistas que súbitamente cambiaron de opinión y retiraron sus firmas para favorecer al escapist ministro Quero que hasta ahora no rinde cuentas al Parlamento sobre su accionar y sus dichos en contra de las niñas ultrajadas por sus maestros en Condorcanqui. Los desertores son Héctor Valer, de Renovación Popular, y Jorge Coayla, congresista que fue elegido por Perú Libre. Consultado sobre su cambio de parecer, Coayla nos dio una peculiar explicación.

“Yo hice mi evaluación y me di cuenta de que en el pedido no se ha incluido al ministro del Interior ni al Defensor del Pueblo, se tiene que hacer la censura a todos los entes culpables. El día que la

congresista Luque me abordó a la salida del Congreso para que firme, yo estaba apurado, estaba de salida porque viajaba a Moquegua y no leí bien. Después, leyendo mi propio comunicado no coincidía con el documento que había firmado, entonces evalué mi forma de pensar y no era lo mismo, por eso pedí retirar mi firma”, dice Coayla. Según sus dichos nadie le pidió que quitara su firma, él lo hizo de manera espontánea. Sin embargo, y sin que nadie se lo preguntara, mencionó de pronto que tiene un proyecto de ley para la creación de la Universidad de Moquegua y que espera que el gobierno le dé impulso. Al consultarle si estaría dispuesto a recabar las firmas para llevar adelante una moción de censura a su gusto para que se incluya no sólo al ministro de Educación sino también al del Interior y

Congresista Jorge Coayla sí retiró su firma de la moción de censura contra Quero, según dice porque no se incluyó al ministro del Interior ni al Defensor del Pueblo.



FOTO JOEL DURÁN

Congresista Ruth Luque, promotora de la moción de censura, denuncia que Quero envió a sus asesores.

al Defensor del Pueblo, dice que “lo va a evaluar”.

En la moción promovida por la bancada “Cambio Democrático-Juntos por el Perú” se precisa que se busca censurar tanto a Quero como a la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, por “discriminación en agravio de los niños y niñas de las comunidades nativas Awajún y Wampis y por no acudir ni dar cuenta a las comisiones del Congreso, pese a la gravedad de los hechos”. Sobre el titular del Minedu también se menciona

que desde que fue nombrado en el cargo “no se avoca como corresponde a su gestión” y, por el contrario, “se encuentra preocupado en cumplir otras funciones que no le corresponden a su cartera”.

Mientras Quero envía al Parlamento a sus asesores para que lo ayuden a levantar su chamuscada imagen, él mismo se juega el pellejo de ministro en otras ligas. Y es que está convencido de que cuanto más cerca se ubique del jefe de la bancada de Alianza para el Progreso, más



El ministro de Educación y la señora Dina Boluarte en el madrinazgo de una escuela.



Quero lanzando flores al ego patético del dueño de la "César Vallejo".

FOTO MINEDU

lejos estará de su destitución. Por eso viajó prestamente a Chiclayo para asistir a la "ceremonia de distinción" de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, con el grado de doctor Honoris Causa por la Universidad Señor de Sipán. Esta universidad la fundó el mismo Acuña en 1999. Ahora la administra su exesposa: Carmen Rosa Núñez.

"Ciudadano César Acuña, maestro César Acuña, amigo César Acuña, le traigo un saludo especial de la señora presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra (...) Le he dicho hoy maestro, guía de otras vocaciones de otros hombres y mujeres que pueden encontrar, gracias a ese legado, don César Acuña, su propia vocación y su propio compromiso con el Perú. Creo que usted es un constructor de instituciones educativas que son el pilar de la república", declamó Quero sin rubor alguno.

No era la primera vez que este ministro y exasesor de Dina Boluarte rendía pleitesía a Acuña. El 21 de junio había acudido a Trujillo para el "Encuentro Nacional de gerentes y directores regionales de Educación del Perú" organizado por el gobierno regional de La Libertad. Ahí llamó a Acuña "líder de la educación en el Perú" y "constructor de instituciones porque una universidad o un instituto son el pilar de la República". A su turno, Acuña devolvió la flor diciendo que "el sector Educación está en muy buenas manos".

Quero también se ha dado tiempo para acudir al distrito de Chicama en La Libertad, de la mano de Acuña, para inspeccionar los avances en las obras de remodelación del colegio bicentenario "Santo Domingo de Guzmán". Los avances llegan a un 18% y, según Quero, la escuela será inaugurada en el primer trimestre del 2025, con una inversión que asciende a 70 millones de soles.

No sólo Quero visita La Libertad. También han hecho lo propio el ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Pérez, el ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, el ministro del Midis Julio Demartini o el indescriptible ministro del Interior Juan José Santiváñez. Este, según Acuña, le ha ofrecido 104 patrulleros y 100 motocicletas para la región.

FOTO MINEDU

negociando con cada afectado, pero no aclaró si apelarán al fallo del Indecopi para obtener la conformidad de obra.

Indecopi se ha convertido en un arma recurrente de los empresarios de la construcción para zafarse de las ordenanzas municipales. El gerente de Edifikarte, Luis Nita, explica que cerca de 50 constructoras han apelado a esa entidad sobre todo para no tener que cumplir con las zonificaciones.

En octubre del año pasado el propio Nita denunció al municipio de Miraflores luego de que este le negara el permiso para construir un edificio de 22 pisos en la cuadra 40 de la avenida Arequipa, donde la zonificación solo permite construcciones de hasta 12 pisos. Según Nita, tras el impase redujo el proyecto a 16 pisos.

En febrero de este año el empresario volvió a denunciar a la gestión de Carlos Canales por paralizar la construcción de un edificio de doce pisos, cinco más de lo permitido, en la calle San Martín. Según el mandamás de Edifikarte, el caso llegó a la Municipalidad de Lima, donde aprobaron el proyecto hace dos semanas.

"Esta misma pelea la hemos tenido con varias otras inmobiliarias. Curiosamen-

te, en el Indecopi estas empresas han obtenido fallos por barreras burocráticas en apenas un mes. Eso es algo muy difícil de lograr porque se tiene que analizar cada caso. Hay estudios de abogados muy fuertes que mandan en el Indecopi, así de sencillo", señala Lino de la Barrera.

Una de las constructoras más beneficiadas es el Grupo VyV, dirigido por Óscar Bravo Puccio. Entre noviembre y diciembre del 2023 VyV obtuvo hasta tres fallos en el Indecopi que le permitieron reiniciar las obras de tres edificios, uno en la avenida Roosevelt, otro en José Pardo y el tercero en la avenida Benavides. Los tres habían sido paralizados por faltas a las normas urbanísticas e incumplimientos de los parámetros mirafloresinos.

El mismo patrón lo siguieron las empresas Viviendas del Perú, Inversiones GP4 y Ensenada Real State Group, subsidiaria de TyC, uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes de la capital.

La generosidad del Indecopi también llegó a Surco, donde la empresa Inmobiliaria Arquitectura y Diseño logró que se le reactive la licencia de construcción de un edificio de siete pisos en la Urbanización Higuiereta. ■

decir la sumisión, del Ejecutivo frente al populismo del Congreso, según el sondeo de Ipsos Perú, publicado por la revista "Semana Económica" en junio pasado.

Los ejecutivos más importantes del país criticaron la incapacidad del Ejecutivo para destrabar proyectos y promover nuevas inversiones en 2023.

Sin embargo, Boluarte anunciará ahora un nuevo "shock" de obras de infraestructura, que incluyen proyectos de inversión por un monto récord de 8,000 millones de dólares a través de asociaciones público privadas, la adjudicación del concurso público para la ampliación del Tren Macho, el ferrocarril que une Huanavelica con Huánuco; el inicio de la construcción de la carretera Longitudinal de la Sierra, tramo cuatro; la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa, que conectará la Costa Verde y el aeropuerto Jorge Chávez, así como la adjudicación en 2025 del contrato para la edificación del terminal portuario de Chimbote con una inversión estimada de 215 millones de dólares.

La señora adelantará también que en julio de 2025 finalizará el estudio final para la construcción de la Carretera Central, a la que describe como "la obra más grande de la historia en el Perú", con una inversión de 24,000 millones de soles; la ejecución en abril de 2025 de la obra Anillo Vial Periférico de Lima y Callao, una autopista de 34.8 kilómetros de longitud, y la realización de proyectos de inversión en saneamiento, transportes, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y salud por un total de 18,830 millones de dólares.

Boluarte señalará en su mensaje que el próximo año se concluirá la segunda pista de aterrizaje en el aeropuerto internacional Jorge Chávez con una inversión de 2,000 millones de dólares. Del mismo modo, dirá, se ejecutarán seis proyectos mineros, 44 obras de agua potable en Lima y Callao y 180 en el interior del país, y se construirán 61,800 viviendas para familias de todo el país a través del desembolso de créditos estatales por 1,980 millones de soles. Boluarte anunciará que no está dispuesta a privatizar el agua.

Frente a la inseguridad ciudadana que reina en el país, la

presidenta formal anunciará que redoblará el resguardo policial "a todas horas del día" y construirá un Laboratorio de Criminalística nivel uno que funcionará en el distrito de Comas.

El gobierno plantea incorporar a 6,000 nuevos policías a fin de año, incrementar los "megaoperativos" contra organizaciones criminales, fortalecer las labores de inteligencia para enfrentar a las bandas criminales, desarticular por completo al "Tren de Aragua" y a todas sus facciones y reforzar el sistema de recompensas del Ministerio del Interior para atrapar a los prófugos más buscados del país, entre los que aparece el fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas.

En esta lluvia interminable de promesas y obras, cuyo objetivo es asegurar la permanencia de Boluarte en la presidencia hasta el 2026, aparecen la construcción de 41 hospitales en 18 regiones del país, la modernización del hospital Arzobispo Loayza, en el centro de Lima, y del nosocomio Antonio Lorena del Cusco, entre otros centros de salud.

En el mensaje a la nación también se destaca la construcción de 20 obras de infraestructura educativa por 619 millones de soles, la entrega en 2025 de 46 Escuelas Bicentenario y la culminación de las obras en otros cinco grandes colegios de Puno, Piura y San Martín.

¿Cuántas de estas promesas verán la luz en los 24 meses de gobierno que le restan a Dina Boluarte? Es probable que pocas, según los analistas consultados por esta revista. Boluarte, de hecho, no cumplió con el 85 % de las promesas que hizo en su mensaje por Fiestas Patrias de 2023, según un estudio realizado por el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior Luis Herrera Romero.

Una muestra de la reiteración en el engaño aparece reflejada en la lista de promesas sobre generación de empleo que la presidenta anunciará este 28 de julio.

Según el borrador del discurso, Boluarte se comprometerá a impulsar la creación de 53,000 "empleos temporales" para pequeños proyectos de infraestructura. Y asegurará que su gobierno tiene previsto incorporar a 300,000 trabajadores a la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo para

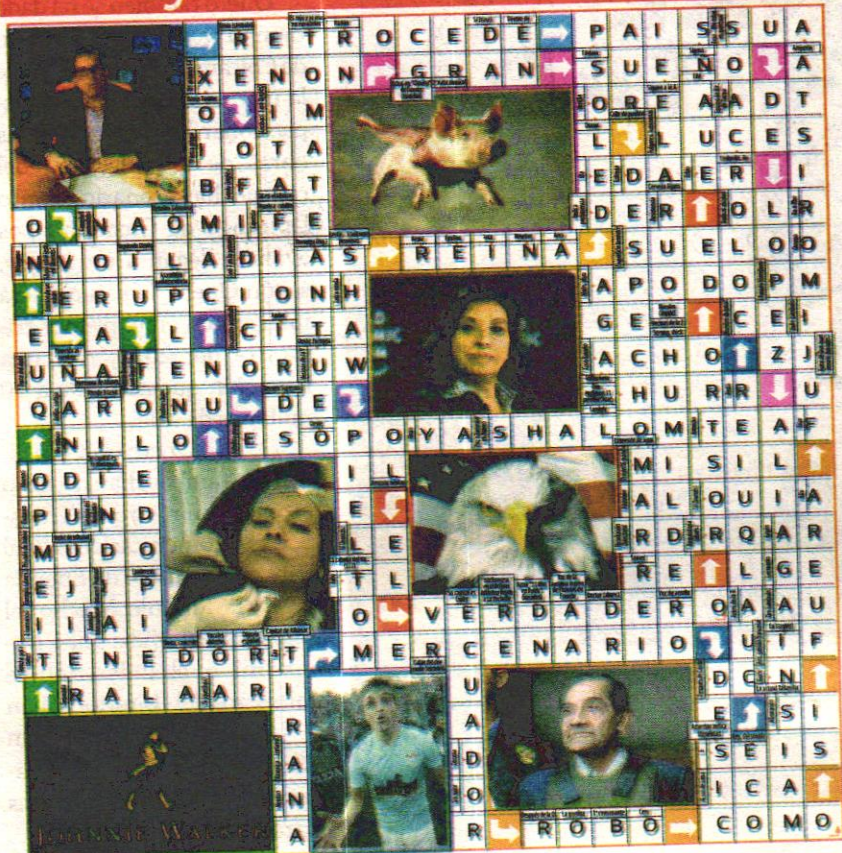
reducir la informalidad laboral en el país.

El catedrático y exdirector general del Ministerio de Trabajo, Edgardo Balbín Torres, desconfía de estas promesas. "En el Perú todo mundo lanza promesas y ofertas y nadie las cumple. En 2008, durante el gobierno de Alan García, se lanzó el 'Plan Reto' para formalizar a 300,000 trabajadores ilegales y, que se sepa, no lo logró", señala Balbín. "Todo el mundo promete formalizar y nadie dice cómo lo hará. La gente no se quiere formalizar. Si quisieran formalizarse, no tendríamos más de 70 % de empleo informal y más del 50 % de trabajadores fuera de planilla. Es un tema que deja feliz a mucha gente, entre ellos a los formales, que se benefician del empleo informal. A mí me late que este anuncio es una de las típicas metas que el Estado se pone cada cierto tiempo sin ningún criterio", dice.

Balbín considera, además, que hay una contradicción entre el anuncio de la supuesta formalización de 300,000 trabajadores informales con la generación de 53,000 empleos temporales. "El empleo temporal de por sí es precario. Con un empleo temporal no se arma ningún proyecto de vida. Es un empleo que le da un ingreso temporal muy básico a familias que seguramente lo necesitan. No está mal. Pero no puede haber una política de empleo que consista solo en dar trabajo de emergencia a la gente. Esa no es una política laboral", sostiene.

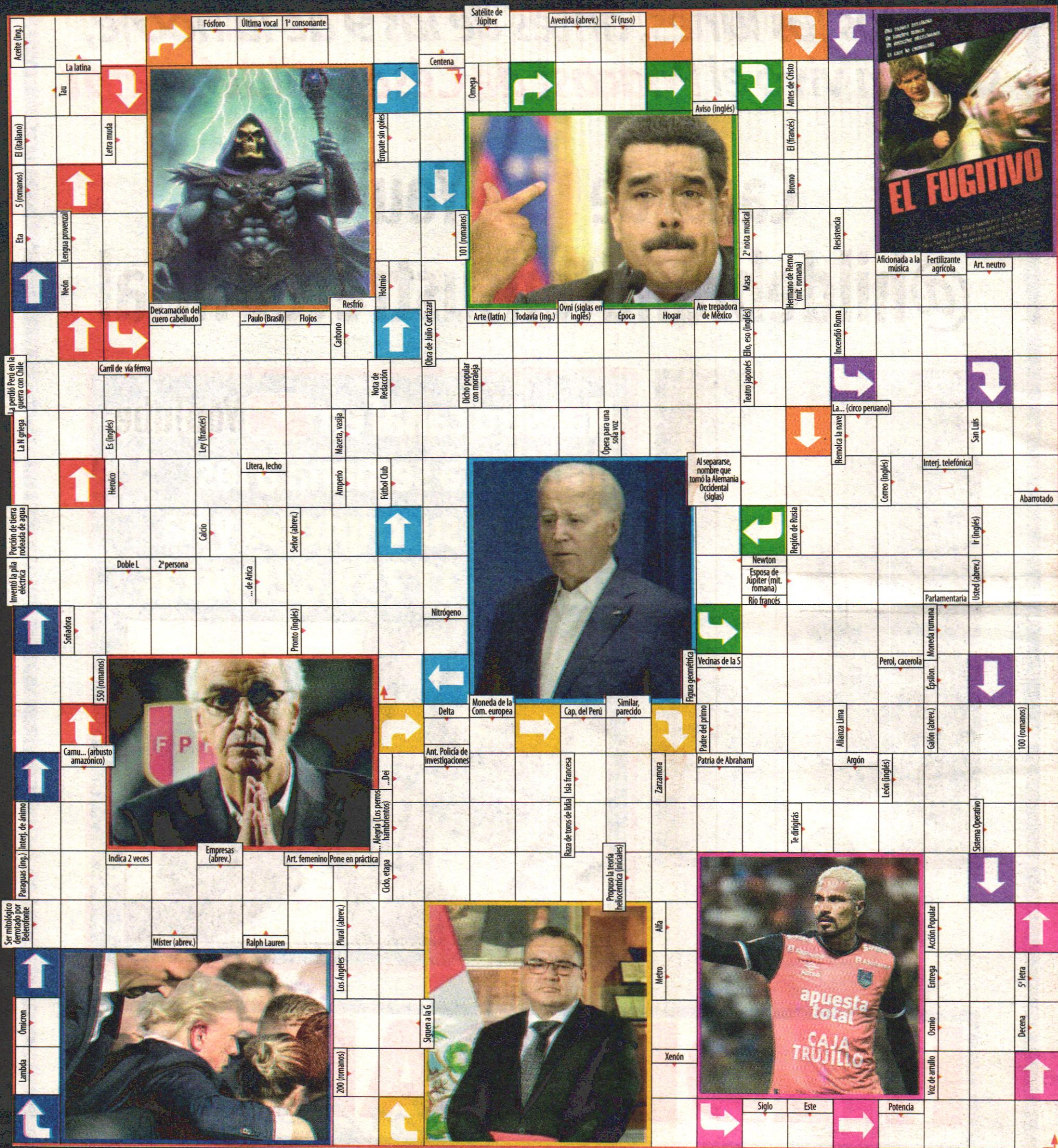
Boluarte cerrará su discurso con otros tres "hitos" que, según indicará, marcarán su gestión de cara al 2026: la realización del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo este año en cinco ciudades del Perú, la inauguración del megapuerto de Chancay, en noviembre próximo, y la visita de la presidenta a la Pampa de la Quinua para la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Ayacucho. La presidenta viajará a esta ciudad, donde 10 civiles fueron asesinados por el Ejército durante las protestas del 15 de diciembre de 2022, según las investigaciones del Ministerio Público, no para pedirles perdón a los familiares de las víctimas sino para hablar de confraternidad, unidad, patriotismo y paz. Será una nueva provocación. ■

Pendograma solución anterior N°695



PENDEGRAMA N° 696

PENDEGRAMA es un juego pendenciero. No se trata de recordar ciudades ni autores, ni de reconocer celebridades. Se trata de imaginar la palabra o la frase cachacienta que debería corresponder a cada imagen y, en algunos casos, a un par de imágenes vinculadas por alguna razón. Es más que un juego: es un desahogo insolente. Corresponde al espíritu de esta revista.



SEMANARIO HILDEBRANDT EN SUS TRECE
ES UNA PUBLICACIÓN DE PLUTÓN EDITORES S.A.C.
AÑO 15, NÚMERO 696
VIERNES 26 DE JULIO DEL 2024

DIRECTOR:
CÉSAR HILDEBRANDT
EDICIÓN GENERAL: REBECA DIZ REY

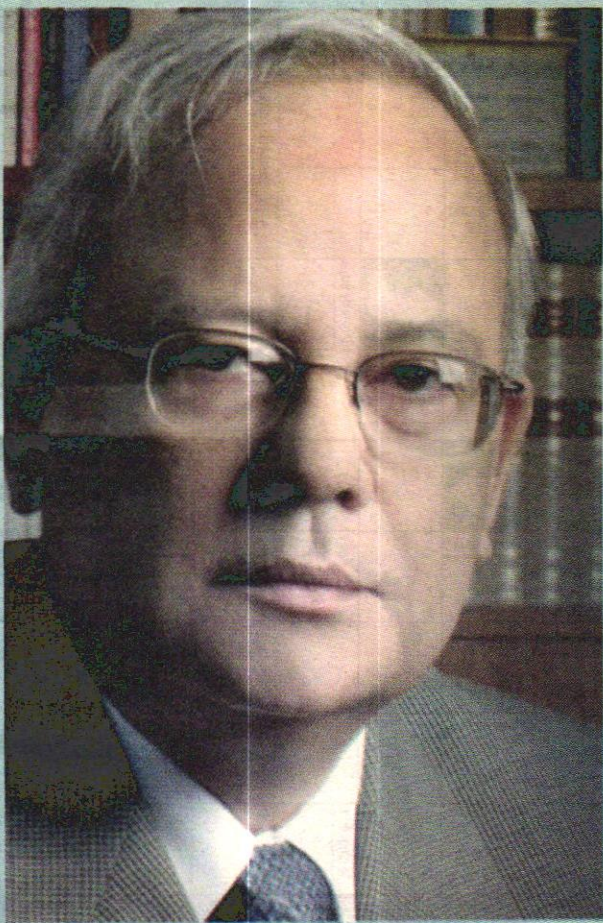
LOS ARTÍCULOS CON FIRMA SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES.

REDACCIÓN: AMÉRICO ZAMBRANO, ELOY MARCHÁN, RICARDO VELAZCO, ALONSO ZAMBRANO, JULIO ROSPIGLIOSI, BRUNO AMORETTI, SHANNA TACO, ELIA Y. DIZ
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: PAUL GIBSON VARILLAS **FOTOGRAFÍA:** JOEL DURÁN, CÉSAR ZAMALLOA **CORRECCIÓN:** MARÍA JIMÉNEZ **PENDEGRAMA:** LAURA YEPEZ
REDES SOCIALES: PIA HILDEBRANDT **COORDINACIÓN:** VALERIA VICENTE **COLABORADORES:** JUAN MANUEL ROBLES, RONALD GAMARRA, RODRIGO NÚÑEZ CARVALLO, RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE, ORLANDO MAZEYRA GUILLÉN, SONIA SUYÓN, DANIEL ESPINOSA, PEDRO CASUSOL **REDACCIÓN:** JR. INDEPENDENCIA 208 OF. 402 MIRAFLORES.
TELÉF: (01) 693-1082 **CONTÁCTENOS:** denuncias@hildebrandtensustrece.com - prensa@hildebrandtensustrece.com - www.facebook.com/semanariohildebrandtensustrece - [@ensustrece](https://twitter.com/ensustrece) IMPRESO EN LOS TALLERES DEL GRUPO LA REPÚBLICA • HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ: N° 2010-05328 EDITADO EN LIMA JULIO 2024

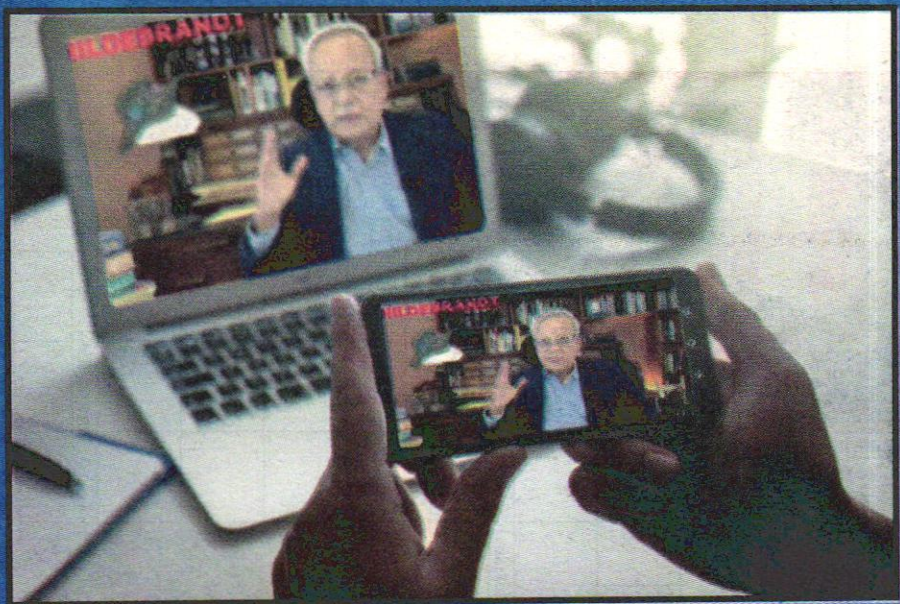
TWITTER: @ensustreco IMPRESO EN LOS TALLERES DEL GRUPO LA REPÚBLICA • HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ: N° 2010-05328 EDITADO EN LIMA JULIO 2024

*Todos los lunes, antes de las 9 de la noche,
siga en vivo el **Podcast de César Hildebrandt***

Canal de  YouTube
@hildebrandtensustreceOficial



Nuestro canal en  YouTube
llegó esta semana a los
131,819 suscriptores y ha
sumado **11'759,821 vistas**



HILDEBRANDT
en sus trece

¡AHORA CON ENTREVISTAS EN VIVO!